

LAS NUEVAS CONDICIONES DE LA LUCHA

DE CLASES EN EL PERU

anibal quijano

LAS PERSPECTIVAS DE LA

RECUPERACION ECONOMICA

felipe portocarrero

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD: SE AGUDIZAN

LAS CONTRADICCIONES

césar germaná

SOCIEDAD Y POLITICA 7



SOCIEDAD Y POLÍTICA

Nº 7 - Mayo 1977 — LIMA - PERU

Dirección: Aníbal Quijano

INDICE

Editorial	Pág. 1
Las nuevas condiciones de la lucha de clases en el Perú. Aníbal Quijano	Pág. 2
Las perspectivas de la recuperación económica. Felipe Portocarrero	Pág. 16
Universidad y Sociedad: se agudizan las contradicciones César Germaná	Pág. 20

La responsabilidad por el contenido de los artículos corresponde a sus autores. La Revista sólo es responsable por las notas Editoriales. Toda colaboración que se envíe a la Revista será bienvenida, pero no se mantendrá correspondencia sobre colaboraciones no solicitadas debido a la limitación de nuestros recursos.

EDITORIAL

SOCIEDAD Y POLITICA apareció hace cinco años con la misión de "cumplir dos tareas centrales: la crítica radical del capitalismo y el estudio y presentación, críticos también, de la experiencia actual de construcción del socialismo y de construcción del movimiento revolucionario contemporáneo". Por eso señalábamos entonces que "la profundización y desarrollo del pensamiento revolucionario en el Perú, requiere sobrepasar el estilo, que todavía caracteriza a gran parte de la actual izquierda revolucionaria, de crítica política centrada en la denuncia de los efectos de la explotación y la dominación capitalista, para avanzar a una crítica de la estructura y el movimiento profundos de este sistema, de sus alternativas y procesos reales de cambio. Esto es, una crítica radical". (cf. SOCIEDAD Y POLITICA, N° 1, junio de 1972, p. 3).

En el momento de la publicación de nuestro primer número el espacio político se encontraba dominado por la aplicación de las reformas, de carácter anti-oligárquico e inconsecuentemente nacionalistas, del gobierno militar. Se delineaban ya claramente las orientaciones directrices del proyecto reformista: establecer un área de capitalismo de Estado asociado al capital imperialista o imponer un control corporativo sobre los trabajadores, todo esto recubierto con la prédica utópica de la conciliación de clases. Sin embargo, en sus primeros años esta situación creó una gran confusión acerca del verdadero carácter de clase del régimen y llevó a que muchos sectores proyectaran grandes ilusiones en su posterior evolución, asegurándonos que por esta vía "nos encaminábamos al socialismo".

En términos de la discusión ideológica las organizaciones políticas tradicionales de la burguesía y sus "intelectuales" carecían de un proyecto alternativo al del régimen. Vivían aún bajo el impacto de la crisis y naufragio de la "democracia representativa" en los años sesenta.

Por su lado las corrientes reformistas y la izquierda revolucionaria no desarrollaban aún nuevos análisis y posiciones más capaces de dar cuenta de la realidad. Las primeras veían en el régimen la confirmación de sus viejos sueños y le otorgaban un carácter revolucionario asignándole a la FF AA el rol de conducir a nuestra patria en una "vía no-capitalista de desarrollo". La izquierda revolucionaria a su vez encontraba dificultades para percibir la naturaleza de las nuevas modalidades de la dominación burguesa.

Esta precisa coyuntura definió la importancia del esfuerzo de reflexión crítica y de discusión al que SOCIEDAD Y POLITICA aspira dedicarse desde su aparición. Es decir era imprescindible apoyar la creación de una nueva base de reflexión política e ideológica para la izquierda revolucionaria, necesaria para afirmar el proceso de autonomización política del proletariado.

El desarrollo mismo de la lucha de clases se ha encargado de transformar profundamente esta situación en los últimos cinco años. Las pretensiones de "originalidad y autonomía conceptual" de la ideología del régimen militar se han estrellado frente a la resistencia de los trabajadores, que han combatido duramente la imposición del control corporativo. La afirmación de la vocación arbitral del sector estatal y su intento demagógico de conciliación de clases han revelado su verdadero rostro: la imposición de una nueva modalidad de dominación imperialista en asociación con el capital estatal. De ahí que la depuración del gobierno militar haya significado la crisis de su "modelo ideológico". La burguesía y sus representantes en el poder confrontan hoy la necesidad de reestructurar una ideología que legitime su dominación de clase, cuyas líneas aún no bien definidas contemplan una amalgama de elementos liberales y corporativos.

En esos mismos cinco años la experiencia vivida por el movimiento obrero y popular ha cristalizado valiosas experiencias y desechado viejas ilusiones reformistas. Se ha consolidado así las bases de la emancipación política del proletariado, traducción de los avances logrados por la clase. De ahí que la izquierda revolucionaria deba partir de este nuevo nivel alcanzado por la lucha de clases para afirmar y desarrollar el pensamiento socialista. No se trata solamente de desenmascarar y criticar los nuevos mecanismos de la dominación burguesa. Corresponde hoy la tarea de enfrentar la discusión y el análisis de las alternativas a largo plazo, y de las opciones coyunturales, que confronta el movimiento socialista revolucionario en el país.

Es justamente al impulso de tal discusión y análisis que se suma SOCIEDAD Y POLITICA, hoy en su sétimo número.

Las Nuevas Condiciones de La Lucha de Clases en el Perú

ANIBAL QUIJANO

LA COYUNTURA INMEDIATA

Do**s** rasgos sobresalen en lo inmediato, en la escena peruana de la lucha de clases. Por un lado, la profundización de la ofensiva económica y política de la burguesía, y de su gobierno militar, contra el movimiento obrero y popular. Por el otro, el repliegue de este último y la desarticulación parcial de algunas de sus más importantes expresiones organizadas, sindicales y políticas.

Lograda la contención y desarticulación parcial del movimiento obrero y popular tras la derrota, bajo la represión, de sus principales movilizaciones, el régimen militar avanza hacia un nuevo objetivo: anuncia la preparación de las bases de un nuevo orden político, cuyo gobierno sería transferido a la "civilidad" al final de esta década o comienzos de la siguiente. Para que los principales componentes del frente burgués puedan discutir las condiciones de este nuevo orden y organizar sus formas de participación en él, se autoriza la reaparición de sus publicaciones y se estimula la reactivación de sus organizaciones políticas y gremiales. Pero, al mismo tiempo, se mantiene el cerco represivo sobre las masas trabajadoras, en el marco del Estado de Emergencia Nacional y la suspensión de las garantías constitucionales, recortándose así las libertades democráticas y sindicales básicas.

Este nuevo paso del gobierno militar prosigue y profundiza una etapa de ofensiva general contra el movimiento obrero y popular, que ha recorrido dos fases desde el cambio de mando del régimen. En la primera, que se extiende de agosto de 1975 a junio de 1976, el gobierno puede cumplir exitosamente tres tareas: la recomposición del frente político de la burguesía, la iniciación de la depuración del gobierno, y de las Fuerzas Armadas, de los vacilantes restos del "velasquismo" en descomposición y la puesta en marcha de las primeras medidas atentatorias frente a los derechos democráticos y sindicales de los trabajadores.

En el segundo momento, desde fines de junio de 1976, frente a la extensión de las movilizaciones de

los trabajadores, a partir de diciembre de 1975 sobre todo, el gobierno militar asume, ahora con el pleno y homogéneo respaldo de todo el frente burgués, su actual carácter frente a las masas obreras y populares. Logra así la derrota de las principales luchas de los trabajadores a través de la represión y contiene al conjunto del movimiento obrero y popular.

Al mismo tiempo, se concluye la depuración del gobierno y de las Fuerzas Armadas de los ya aislados y reducidos remanentes de la descomposición del velasquismo, fortaleciéndose la incorporación de la representación tecnocrática y directa de la burguesía en el manejo del Estado.

Esta es la base que permite ahora a la burguesía y a su gobierno, disponerse a discutir los fundamentos de un nuevo orden político, las instituciones correspondientes, las cuotas y formas de participación civil y militar burguesa en el poder. Y es en este preciso sentido, que es correcto sostener que todo eso implica una profundización de la ofensiva contra el movimiento obrero y popular.

Por su lado, el repliegue y desarticulación parcial del movimiento obrero y popular, que constituye el segundo rasgo de la coyuntura inmediata, es el resultado, principalmente, de la debilidad del proceso de organización y centralización sindical y política del movimiento obrero, tanto como del oportunismo y la confusión de sus principales direcciones, expresión, y factor a la vez, de la inmadurez del proceso real de emancipación de la conciencia de la clase frente a su previa subordinación a las ideologías reformistas.

Durante la primera fase de la ofensiva lo que caracteriza al movimiento obrero y popular es su situación contradictoria. Se produce una radicalización ideológica y política de capas crecientes de trabajadores, con la consiguiente acentuación de la diferenciación política en el seno del movimiento; se entienden las movilizaciones reivindicativas y políticas de las bases de todas las centrales sindicales, incluidas las oficialistas. Pero también se genera un mayor distanciamiento entre las bases y la dirección central de la principal organización sindical, la CGTP, dado que la política conciliadora que el PCP le impone pierde todas sus apariencias de jus-

tificación. La extensión y radicalización de las presiones de las bases fuerza a fines de diciembre de 1975 que la CGTP decreta un paro en Lima Metropolitana, pero no la acción de fuerza a nivel nacional que los trabajadores ya reclamaban en ese momento.

Ese paro produce en el seno de la dirección del PCP y de la CGTP diferenciaciones y conflictos que derivan en el cambio de la dirección de esta central a comienzos de 1976, recayendo la influencia preponderante en manos de las corrientes más conciliadoras del PCP. A partir de ese momento, esta nueva dirección literalmente paraliza la vida de la CGTP, en el proceso instantáneo en que se agudizan los conflictos sindicales y arrecia la ofensiva patronal y gubernamental. En esas condiciones las luchas de las bases se extienden y agudizan, pero ya de manera completamente dispersa y aislada. El PCP proclama públicamente su respaldo al régimen militar y llama a las masas a sostenerlo contra "la oligarquía, el imperialismo y el fascismo", acentuando la confusión entre los sectores de trabajadores bajo su influencia política y sindical.

La etapa se cierra con el violento enfrentamiento de los trabajadores y pobladores de toda la zona de la Carretera Central - Vitarte con los resultados conocidos.

Al imponerse, a fines de junio de 1976, el cerco represivo y ante la total parálisis de la CGTP y la debilidad de los intentos de coordinación de las corrientes clasistas, las masas entran en un repliegue temporal durante los meses siguientes.

A fines de agosto y comienzos de setiembre, surgen y se frustran diversos intentos de coordinación entre las bases sindicales, por la confusión, el sectarismo y la pretensión hegemónica y manipuladora de las direcciones políticas de izquierda con presencia en algunos sectores importantes; se agudiza así la crisis interna de las organizaciones políticas más influyentes. Este hecho se refleja en la evolución del CCUSC (Comité de Coordinación y Unificación Sindical Clasista), cuyas posibilidades de revitalización se habían frustrado en abril debido a las prácticas manipuladoras, que terminaron dividiendo a las bases obreras de los sindicatos magisteriales y grupos estudiantiles. El CCUSC queda así aislado y sus decretos de huelga general entre julio y octubre no despiertan reacción alguna.

En octubre se inicia y es derrotada la huelga de los trabajadores municipales. Inmediatamente después la Federación de Pescadores presenta combates en protesta por la privatización de la industria y por la despedida de miles de trabajadores. Esa huelga, que se extiende por todo el litoral del país, remueve las bases sindicales de todos los otros sectores; una extensa agitación recorre el país, presionando sobre la dirección de la CGTP para realizar un paro nacional. Sin embargo, esta dirección se encuentra paralizada, desatándose diferenciaciones y conflictos en el seno del PCP. A comienzos de diciembre los pescadores son derrotados en toda la línea.

Durante los meses de la huelga pesquera las organizaciones de izquierda con alguna influencia en el movimiento sindical procuran agitar a los trabajadores y ampliar los paros y movilizaciones. Algunas se producen, pero de poco aliento y son

rápida reprimidas. Como consecuencia, los grupos políticos más influyentes se empantanaron en querrelas internas, agudizando la confusión en las bases y dificultando la resistencia frente a la ofensiva. A fines de diciembre, las luchas cesan y el movimiento entero se encuentra empantanado.

De ese modo, mientras que de un lado el oportunismo conciliador del PCP paraliza la CGTP y frustra las presiones de las bases, del otro, el aventurerismo de las principales corrientes de izquierda hace igualmente patente su confusión y su desbande. Ni centralización, ni dirección adecuada de las luchas de las bases han sido posibles en el momento del más agudo enfrentamiento al régimen militar.

De ahí que, como coyuntura inmediata, se configure una correlación de fuerzas abiertamente desfavorable al proletariado y al conjunto del movimiento popular. Mientras que por una parte emerge un frente burgués que orienta la política del gobierno y se apoya en ella bajo el comando de las fracciones burguesas más avanzadas (grupos monopólicos internacionales e internos), por el otro se acentúa la crisis de dirección y de centralización del movimiento obrero y popular, en medio de una peligrosa situación de repliegue y desarticulación parcial de los sectores más combativos.

Todo esto, con el telón de fondo de una crisis económica aún en curso de profundización, con una inflación del 100% en el total de los últimos tres años y una abultada deuda externa, que se descargan sobre los sectores populares.

ESTA COYUNTURA, FASE INICIAL DE UN NUEVO PERIODO HISTORICO DE LAS LUCHAS DE CLASES EN EL PERU

No habría modo de captar el significado de esta situación para el destino futuro de las luchas de clases en el Perú, en particular para las alternativas del desarrollo político del proletariado, sin tratar de descubrir en el seno de las propias características de la coyuntura, como se expresan en la conducta de las clases y de sus fracciones significativas, las determinaciones de la estructura básica de sus relaciones, en sus varios niveles, y, en consecuencia, de las tendencias virtuales y activas de su desenvolvimiento.

Por eso es necesario reiterar aquí, lo que hemos señalado ya en otros textos previos: la actual coyuntura, incluida la correlación de fuerzas que configura, da cuenta de que se ha iniciado en el Perú un período histórico nuevo para las luchas de clases.

El sello fundamental de este nuevo período, es la tendencia ya iniciada hacia una creciente diferenciación política entre las clases básicas, la burguesía y el proletariado, y, a la constitución de sus respectivos frentes políticos, a lo largo de una creciente profundización de sus enfrentamientos. Es decir, a la reaglutinación política de las otras capas sociales en el país en torno de las luchas entre las clases fundamentales.

Se trata, así, de la progresiva constitución del proletariado como una clase políticamente revolucionaria de modo efectivo y no sólo virtual, y de

AUGE Y BANCARROTA DEL REFORMISMO EN EL PERU

A.—Las corrientes Democrático-Nacionalistas

su emergencia como potencial dirigente de un frente político de otras capas sociales dominadas y de una parte de las capas medias de nuestra sociedad. Este proceso, obedece al curso de depuración del carácter capitalista de la formación social y de las relaciones de clase que ello implica, agotando un prolongado período de la condición transicional de esta formación social. Esta nueva condición del proletariado, ha venido manifestándose en una conciencia de clase que, aunque desigualmente, va abarcando a los más importantes sectores del proletariado: en una experiencia organizativa que, aunque todavía dispersa, es ya muy extendida en la clase, y ha producido núcleos y cuadros revolucionarios que disputan la dirección de importantes fracciones proletarias. Y, así mismo, por la creciente gravitación de otras capas sociales dominadas y medias, en torno de esta nueva presencia del proletariado.

En esta dirección, se establece una radical diferencia con períodos anteriores de las luchas político-sociales del país. En ellas, los trabajadores y sobre todo el proletariado organizado, tomaron parte subordinados a direcciones de origen burgués y pequeño burgués, y en dependencia de los conflictos políticos entre los componentes de la coalición dominante, y en especial de sus fracciones burguesas. Ahora, en cambio, asistimos a un proceso de emancipación del proletariado de esa dependencia de clase para la definición del carácter de sus movilizaciones, y de la subordinación directa respecto de las organizaciones políticas de defensa del orden capitalista. El movimiento obrero se desarrolla como movimiento proletario, en el sentido político del término, y las luchas de clases van adquiriendo una profundidad correspondiente, incluso si sus niveles de violencia o de agudez son eventualmente menores que en otros períodos previos.

Y es, precisamente ésta, la base real de cómo se ha ido configurando la conducta de la burguesía en esta etapa. Si ha debido recurrir a una ofensiva general, y para su fortuna en una etapa en la cual el proletariado no ha conquistado aún madurez organizativa, centralizadora y directora de sus luchas, eso no se explica solamente por las necesidades de la crisis, sino porque éstas se establecen sobre un terreno político marcado por la profundización de las luchas de clases. Esto es, porque el problema del poder está ingresando virtualmente al escenario.

No es, por lo tanto, solamente en la coyuntural correlación de fuerzas que resulta de esta primera fase de enfrentamiento, sino en el modo cómo éste ha sido desarrollado por la burguesía y su gobierno militar y en la manera en que se buscan reordenar las bases y la estructura institucional de su Estado, donde se ponen de manifiesto las nuevas condiciones de las luchas de clases y el carácter distinto que asume, respecto del pasado, el actual período en el Perú. Y de ello es, por eso mismo, que hay que partir para tratar de descubrir las alternativas mejores para el desarrollo de estas luchas y el de su carácter revolucionario.

La iniciación de este nuevo período histórico de las luchas de clases en el Perú, implica la cancelación de un prolongado período de desarrollo de las tendencias ideológicas democrático-nacionalistas, que desde los años treinta ganaron predominio entre la gran mayoría de las capas medias y explotadas del país. Dichas tendencias ideológicas han presidido la orientación de las luchas populares en el marco de una crisis cada vez más abierta del Estado Oligárquico y Semi-Colonial, y encontraron su momento de cristalización y de agotamiento en el régimen militar dirigido por Velasco, en contra de las tendencias "neo-liberales" que la burguesía, y en especial sus sectores más modernos, agitaban como alternativa a la descomposición del Estado Oligárquico.

En otros textos hemos establecido las determinaciones históricas de ese proceso, así como el contexto específico en el cual cristaliza en el régimen militar velasquista y las condiciones de su agotamiento. Eso nos evita, por el momento, insistir más a fondo en estas cuestiones.

Sin embargo, es necesario aquí reiterar sumariamente algunos de los hechos más directos y profundamente vinculados a las características de la situación actual y a sus tendencias de desenvolvimiento.

1.—Las tendencias democrático-nacionalistas cristalizaron, durante las primeras etapas del régimen velasquista, a través de una contradictoria coalición de dos corrientes que, en las capas medias, representaban diversamente al capital. De una parte, una corriente que amalgamaba a grupos de intelectuales y burócratas, portadores de ideologías de reforma democrático-nacionalista, en grados variables de radicalismo. De otra parte, a grupos portadores de ideologías estrictamente tecnocráticas sobre el manejo del capital, pero también interesados en la realización de reformas modernizadoras y "desarrollistas" en la sociedad y en el Estado peruano.

Por el contexto inmediato en que se constituye el régimen militar —crisis política abierta de la burguesía y de sus representaciones políticas, en una etapa de ascenso de las luchas populares, no obstante sus importantes derrotas— y por su lugar en los altos mandos del Ejército, los representantes del primer sector, pudieron alcanzar una posición dominante, aunque negociada, en esta coalición política y orientar, en sus términos, las grandes líneas del proceso de reformas, sobre todo durante la primera etapa del régimen militar.

2.—De ese modo y por esos factores, esa coalición de gobierno estableció un terreno común de encuentro muy amplio con las direcciones burocráticas del movimiento obrero y popular, que en ese momento estaba conquistando su independencia respecto de la dirección inmediata, orgánica, de las organizaciones políticas que manteniendo rasgos ideológicos de origen democrático-nacionalista como el APRA, venían reorientándose políticamente en

alianza con las corrientes "neo-liberales" y "desarrollistas" de la burguesía, o como Acción Popular, mas debió en su influencia sobre las masas, que era el producto típico del "desarrollismo" de la burguesía moderna y de sus capas medias tecnocráticas, con verbales incrustaciones nacionalistas en sus comienzos.

Esa situación, permitió a la dirección del reformismo obrero-burocrático, encarnada en el PCP, afirmar su hegemonía sobre el movimiento obrero organizado que se centralizaba en la CGTP. Pero ese hecho daba cuenta, también, que no obstante la conquista de su independencia sindical frente al APRA, el grueso de las masas trabajadoras no se había aún sacudido de la hegemonía ideológica democrático-nacionalista, aunque la radicalizaba, comenzando a traducirla en lenguaje socialista, tal como era la opción ideológica básica del PCP, y otras corrientes menores afines.

3.—Esas tendencias pudieron, inclusive, alcanzar una relativa consolidación, a partir del hecho de que las primeras y realmente importantes reformas emprendidas por el régimen militar, bajo dirección velasquista, enfrentaron la cerrada oposición de las fracciones oligárquicas de la burguesía y la aún más enconada, poco después, de la mediana burguesía, así como la reacción ambigua—entre la oposición y la negociación—de la burguesía monopolística internacional e interna y del principal Estado Imperialista, los EE.UU.

Estos hechos fueron traducidos en muchos sectores de trabajadores, a través de su versión radical de la predominante ideología democrático-nacionalista, como un enfrentamiento radicalmente "anti-imperialista" y hasta "anticapitalista" conducido por el régimen militar. Esa imagen fue reforzada por la prédica del PCP, con el respaldo internacional correspondiente, que presentaba el conjunto de la situación como una virtual alianza de clases populares "antimperialistas", bajo el liderazgo del régimen militar, cuyas contradicciones con el imperialismo empujaban, necesariamente, en una dirección "anticapitalista", por lo cual el inicial "apoyo crítico" daba lugar a un apoyo total e irrestricto, cuyo precio era la neutralización política del proletariado y las demás capas populares, afectando inclusive sus obligadas demandas reivindicativas.

Si bien la mayoría de los trabajadores no podía dejar, ni dejó, de movilizarse por sus reivindicaciones inmediatas, ciertamente el régimen militar pudo gozar, durante sus primeras etapas, de una apreciable neutralidad política de gran parte de los trabajadores, inclusive de una simpatía rebajada por la desconfianza. Esa desconfianza fue extendiéndose, particularmente desde fines de 1972, pero la imagen anterior prolongó aún su presencia en muchos sectores de trabajadores, como para impedir una percepción más claramente ajustada a sus intereses de clase cuando los hechos comenzaban a revelar la naturaleza social básica del régimen militar, y aún para producir vacilaciones crecientes en algunas organizaciones de izquierda.

Minoritarias fracciones de trabajadores, ya en esas primeras etapas, entraron no obstante en conflicto abierto con el régimen militar, bajo la influencia de corrientes y agrupaciones de la izquierda revolucionaria, como los trabajadores del ma-

gisterio, que se reorganizaron en el SUTEP y sufrieron violentas represiones desde 1971, lo mismo que los mineros.

4.—Esa situación fue modificándose, de modo relativamente rápido, desde 1973 en adelante, acelerándose desde mediados de 1974. Las propias medidas del régimen militar permitían la reorganización de las bases del capital en el país, en un sentido de depuración del carácter capitalista de la entera formación social y, en consecuencia, de las relaciones de clase implicadas, agotando el terreno de cultivo de la ideología democrático-nacionalista y abriendo el piso de expansión de ideologías más depuradamente clasistas, y en el caso del proletariado y otras capas de explotados, el reforzamiento de la influencia del socialismo.

La depuración de las relaciones de clase, desataba las históricamente necesarias tendencias de su conflicto, agudizadas por la debilidad del capitalismo dependiente y subdesarrollado, inapto para asimilar los elementos de conciliación de clases que los extremos utópicos de la ideología de las capas medias radicales en el gobierno, injertaban a las reformas del capital, como en el caso de las CC.II. Y, por otra parte, en tanto que el régimen militar procuraba negociar, a través de la formación del capital estatal, nuevas formas de asociación con el capital imperialista internacional, asumía—probablemente a contrapelo del nacionalismo de sus sectores más radicales—crocientemente, la defensa del capital imperialista asociado al capital estatal.

Esos problemas, fueron atravesando al régimen militar, produciendo cambios en la correlación interna de fuerzas y diferenciaciones nuevas, al paso en que se agudizaban los conflictos obrero-patronales, que ahora incluían al propio Estado, gerente de una parte importante del capital, y que en consecuencia enfrentaba al régimen militar a nuevas y mayores capas de trabajadores, reduciendo y deteriorando su previa imagen, a pesar de los esfuerzos del PC, entre los trabajadores.

Las modificaciones en la correlación de fuerzas dentro del régimen, se producían a lo largo de dos tendencias. La primera, ampliando la influencia de los sectores que más directamente ejercían la representación tecnocrática del capital, lo que pronto se robusteció por la incorporación de representantes directos de la burguesía a posiciones importantes en el aparato administrativo del Estado. La segunda, produciendo diferenciaciones importantes en la corriente democrático-nacionalista, antes aglutinada en el "velasquismo", y cuyo predominio otorgaba al régimen entero ese carácter. Esa diferenciación fue dividiendo a un grupo cuyo nacionalismo se traducía como estatismo desarrollista, y que se orientó a imponer por la violencia a las masas el diseño corporativo de reorganización institucional del Estado, frente a otro grupo que mantenía vacilantemente su orientación democrático-nacionalista, traduciendo ahora como un programa de conciliación de clases, como base de implantación del diseño corporativo del Estado, implicando formas de participación de los trabajadores no impuestas por la violencia, y de capitalismo de Estado, como eje central de la administración del capital, pero defendiendo igualmente la esencial asociación con el capital imperialista.

Así, una corriente tecnocrática, modernista y desarrollista, con propensiones corporativistas ganaba terreno en el régimen militar, mientras el "velasquismo" entraba en descomposición, diferenciándose en una corriente de orientación fascitizante (corporativismo impuesto por la violencia y nacionalismo estatista) y una corriente corporativista, pero que persistía en la búsqueda de formas "democráticas" de participación de trabajadores en las instituciones corporativas de conciliación de clases, y cuyo nacionalismo se traducía en la búsqueda de desarrollo del capital estatal asociado al capital internacional, con la pretensión de hegemonía del primero.

Es el desenvolvimiento de estas diferenciaciones y conflictos entre las varias corrientes dentro del régimen militar, entre las que fluctuaban muchos de sus miembros, y entre las cuales se establecían convergencias y conflictos contradictorios, según el cambiante contexto de las luchas de clases que se extendían y atravesaban y comprometían al régimen militar, lo que presidirá el destino del gobierno hasta el cambio de mando en Agosto de 1975.

5.—En tanto que el régimen entero iba enfrentándose a los trabajadores, su carácter esencialmente capitalista iba quedando al descubierto para las masas. Y simultáneamente, eso implicaba la depuración de su composición social en favor del creciente predominio de la representación burguesa, directa y tecnocrática, disminuyendo el poder de la representación de las capas medias y acentuando la división dentro de sus portadores. La depuración del carácter de clase del régimen militar era la otra cara de la descomposición del "velasquismo", todo ello contribuía poderosamente a la agudización del conjunto de las luchas de clases en el país, principalmente por el hecho de que se protuberaban las tendencias fascitizantes, incluyendo al propio Velasco en las mismas. Las masas se enfrentaban resueltamente a ellas en todos los sectores y lugares del país.

El aislamiento final de la tendencia corporativofascista, convertida en una "camarilla" que por el lugar formal de sus miembros en el Estado disponía aún de poder, frente a las otras corrientes, su falta de legitimidad dentro de la burguesía, por su origen reformista democrático-nacionalista, y frente al crecimiento de las movilizaciones de las masas, determinaron el cambio final de la dirección del régimen militar, y el desarrollo de la tendencia tecnocrática que representaba de manera más depurada los intereses de la burguesía.

B *Del reformismo obrero-burocrático al Socialismo Revolucionario*

6.—Durante este proceso, y en esas condiciones, al extenderse las luchas de los trabajadores, el proceso ideológico y político entre las masas entró en una nueva fase.

En primer lugar, el amplio predominio inicial de las versiones radicalizadas de la ideología democrático-nacionalista se fue reduciendo y abriendo el paso a una creciente diferenciación ideológico-política entre numerosos sectores de trabajadores. En

algunos de ellos, decisivos —como los trabajadores metalúrgicos, mineros, maestros, bancarios, y otros menores— la vieja disputa entre el aprismo y el reformismo obrero-burocrático del PC, se convirtió en la disputa entre éste último, formalmente socialista y diversas otras corrientes socialistas. El socialismo pasaba a ser la ideología que tendía al predominio; aunque su formulación fuera aún general y difusa, desarrollaba la dirección anticapitalista del movimiento obrero, sobretudo, y de los grupos mejor organizados de asalariados medios.

Esa extensión de la influencia de ideología socialista, aparejaba el crecimiento de diversas agrupaciones de izquierda, algunas de las cuales sobrepasaban el marco del movimiento universitario en donde surgieron y se mantenían, comenzando a influir directamente en sectores importantes de obreros y asalariados medios, así como en importantes capas de semiproletariado rural y de campesinos.

En segundo lugar, la conducta de apoyo al régimen militar sostenida invariablemente por el PC, perdía constantemente respaldo en el desenvolvimiento de la realidad, y la desconfianza frente a esa política se extendió en las bases del movimiento obrero centralizado en la CGTP, cuya dirección de cúpula era monopolizada por ese partido. Esa línea política aparecía cada vez más claramente en su carácter oportunista y conciliador con el capital, obligada a neutralizar todo lo que podía, inclusive las demandas reivindicativas de los trabajadores, en servicio de su apoyo al régimen, cuando las dificultades económicas de las masas eran crecientes.

Esas tendencias se fueron traduciendo en un creciente distanciamiento entre las bases y la dirección de cúpula de la CGTP, y aún en varias federaciones sectoriales, y al mismo tiempo en diferenciaciones políticas dentro del propio PC.

La extensión de los movimientos de masas, rompía también la artificial cohesión de las organizaciones sindicales oficialistas, como la CTRP, cuyas bases obreras limeñas asumían posturas radicales. Se revitalizaban otras organizaciones sindicales, como la de Gráficos, pero en esas condiciones decidían mantenerse al margen de las Centrales Nacionales, así como más tarde la ruptura entre la Federación de Pescadores y la CTRP producía el mismo resultado.

El proceso de centralización sindical quedaba profundamente afectado, como consecuencia del propio proceso de extensión y radicalización de las luchas de masas, acompañado por diferenciaciones ideológicas y políticas.

En tercer lugar, la declinación de la hegemonía de la dirección PC en el movimiento obrero y popular, sindical y políticamente, no lograba traducirse en una reaglutinación política centralizadora, capaz de desarrollar las luchas de las masas y de reorientar el proceso de centralización sindical.

A pesar del crecimiento orgánico y de la influencia de algunas agrupaciones, el sectarismo manipulador, las vacilaciones frente al régimen y la radical inadecuación de las teorías políticas frente a la realidad, surgieron como obstáculos que se revelaron infranqueables para las perspectivas de orientación, desarrollo y centralización de las nuevas corrientes desatadas en el seno de las masas en el curso de la agudización de las luchas de clases.

El proceso de las masas se desarrollaba, así, con características extremadamente contradictorias. Sus luchas se extendían a todos los sectores y en todos los lugares del país; se revitalizaban las organizaciones de base en el movimiento sindical; se reducía rápidamente la influencia de ideologías democrático-nacionalistas; diversas ideologías socialistas extendían su ámbito de influencia. Sin embargo, su dirección principal, PC-CGTP, se distanciaba cada vez más de las bases, y se burocratizaba aún más. Y en el otro extremo, la fragmentación orgánica, el sectarismo y la manipulación, además de vacilaciones crecientes frente al régimen en depuración, dispersaban las luchas e impedían la centralización y la maduración política de las nuevas corrientes de masas.

7.—Al acentuarse la crisis económica, durante 1975 y 1976, todas estas tendencias entraron en agudización.

Las luchas de las masas cobraron un momento de amplia extensión y agudización. En pocos pero importantes casos, llegaron hasta a producir nuevas formas de coordinación y de organización, que ligando las luchas obreras al apoyo directo y activo de una vasta población popular de toda una zona urbana, aparecieron como virtuales embriones de formas de poder insurreccional, como en el caso de los enfrentamientos de la Carretera Central-Vitarte, donde más de diez mil habitantes de la zona mantuvieron en jaque a las fuerzas represivas por más de dos días. Esos hechos fueron, sin duda, decisivos para el desencadenamiento, inmediatamente después, de la actual fase de la ofensiva del gobierno militar. Pero, en la vasta mayoría de los otros casos, las luchas se dieron de modo disperso y aislado, no obstante su simultaneidad.

El régimen ingresó en sus tramos finales de depuración y el "velasquismo" en sus fases finales de descomposición, producido ya el cambio de dirección del gobierno, y la iniciación de la ofensiva general contra las masas en movilización.

El PC y su dirección en la CGTP se empantaron en las trampas de su política oportunista, que ninguna instancia de la realidad podía ya coonestar ni siquiera en las apariencias, llegando inclusivo, en el momento mismo en que se desencadenaba la ofensiva, hecho ya el cambio de mando en el gobierno, a sostener públicamente que el Partido seguía considerando a ese nuevo régimen militar como "revolucionario y antimperialista" y llamaba a las masas populares a sostenerlo contra la "oligarquía, el imperialismo y el fascismo" (1). Los sectores de masas donde este Partido ejercía su influencia política, así como las bases de la CGTP, quedaban así prexas de la confusión y carentes de dirección centralizada para sus inequívocos impulsos de resistencia y de movilización contra la ofensiva.

Esas consecuencias sobre las masas fueron tanto mayores al agudizarse en ese momento la crisis política (ideológica y orgánica) de la generalidad de las otras agrupaciones de izquierda, en particular de las que habían logrado mayor influencia en las bases del movimiento obrero y popular. La desesperación aumentó la ya ostensible desorientación política de algunas tendencias que, como Patria Roja y el POMR, con diversa argumentación llega-

ron a sostener que el país ingresaba en una fase pre-revolucionaria inmediata, derivando de ese modo en actitudes claramente descebelladas, que procuraban arrastrar a los trabajadores a acciones que éstas habían no realizables en ese momento, y que, por eso, no prosperaron. Ese es el caso, principalmente, de los "decretos" de huelga general que Patria Roja emitió, sucesivamente sin eco alguno, usando el nombre del CCUSC, cuya dirección formal ejercía, aislándolo así de las masas.

8.—De este modo, durante estos últimos ocho años, se definieron las condiciones de la bancarrota histórica del reformismo democrático-nacionalista, en tanto que posible dirección eficaz de un movimiento popular revolucionario, en el contexto actual nacional e internacional del capitalismo. Y se abrieron aquellas que permiten el desarrollo de la influencia de alternativas socialistas como referencia político-ideológica de las masas.

La bancarrota de las ideologías democrático-nacionalistas es, pues, una de las expresiones directas del final de todo un período histórico en el Perú, así como la extensión de la influencia de ideologías socialistas indica el comienzo de otro.

Se sigue de allí que se profundizan las luchas político-sociales, asumiendo contenidos de clase cada vez más depurados y diferenciados. Pero es necesario dejar claro que eso no implica, ni que hayamos ingresado en una coyuntura pre-revolucionaria inmediata, ni que las posibilidades de desarrollo del socialismo revolucionario sean en adelante linealmente crecientes.

De un lado, porque la bancarrota real del reformismo democrático nacionalista, como dirección y, al mismo tiempo, como encuadramiento de las luchas de las masas, no significa que sus consecuencias se borren automáticamente. Ahora mismo, estamos asistiendo a intentos de recuperación y reorganización de sus restos, bien que significativamente con otro lenguaje, en el llamado Partido Socialista Revolucionario (que no es ni lo uno ni lo otro), y en los anuncios de formación de un posible Movimiento Revolucionario Velasquista (que podrá ser lo uno pero no lo otro).

Y, de otro lado, en el mismo escenario y en el mismo proceso, hemos verificado el fracaso del oportunismo conciliador y del aventurismo de ciertas corrientes de izquierda, que surgieron en este período como las corrientes dominantes de los tramos iniciales de formación y desarrollo de un movimiento socialista entre las masas. Y son, desafortunada pero no accidentalmente, muy débiles aún los embriones de una posible alternativa revolucionaria socialista, efectivamente defendida del oportunismo y del sectarismo ultrista.

Ambos problemas indican que las masas trabajadoras peruanas no han salido aún del todo de las redes ideológicas de raíz pequeñoburguesa y burocrática. Y aunque es demostrable que las tendencias profundas de la estructura renovada de nuestra sociedad, están empujando a las clases y capas sociales hacia diferenciaciones y polarizaciones políticas cada vez más profundas, de allí no se sigue que las ideologías, hábitos, organizaciones y confusiones engendradas en el pasado no estén aún en actividad.

Nada sería, por eso, más peligroso ahora, para el destino del movimiento revolucionario socialista en formación, que imaginarse y proceder como si el sólo despliegue de una voluntad enérgica sería bastante para cimentar sólidamente un edificio que implica la historia misma del conjunto de las luchas de clases del Perú.

Las tendencias objetivas, demostrables, de la estructura profunda de la sociedad, definen los objetivos y el movimiento estratégico de nuestras luchas. Pero es el modo como la realidad aparece, esto es, las instancias concretas en que se muestran las intersecciones entre el pasado y el presente, la estructura y la historia, lo que define los movimientos tácticos que dan sentido a la estrategia y que cobran el suyo dentro de ella.

Y la realidad peruana actual de las luchas de clases, incluye al mismo tiempo sus tendencias profundas de largo plazo, y las materializaciones de sus previos procesos entrecruzándose con las primeras manifestaciones de las actuales tendencias. Procurar ver la realidad en su conjunto es asumirla con todos estos niveles, al mismo tiempo y por separado. Sólo ello permite eludir el oportunismo y el sectarismo ultristas, que son, precisamente, el resultado de una visión o superficial o parcial de la realidad, en que suelen combinarse la ignorancia con una defectuosa vinculación de clase para producir una estructura ineficaz del conocimiento.

Por todo eso, antes de levantar el problema de las condiciones y posibilidades del desarrollo futuro del movimiento revolucionario socialista, desde el nuevo punto de partida que la historia coloca, es indispensable hacer el esfuerzo de descubrir el modo en que hoy está configurada esta realidad y las tendencias que la mueven, de identificar los problemas que hay que enfrentar y las tareas que pueden dirigirse a eso, así como de las fuerzas inmediatas y potenciales que pueden ser puestas en juego, en qué momento y bajo qué condiciones.

Lo que sigue es, apenas, el señalamiento de las cuestiones más significativas y de las líneas generales de su abordaje. La prosecución y profundizaciones de este esfuerzo es la tarea de todos los militantes.

LA SITUACION Y LAS TENDENCIAS DE LA BURGUESIA EN EL NUEVO PERIODO

Lo primero que aquí debe ser despejado, es que en la composición de la clase burguesa en el Perú no concurren solamente peruanos, sino también los representantes de los intereses de los grupos de burguesía monopolista internacional que operan en el Perú.

Eso corresponde a la composición del dominio del capital en este país, en cuyo seno intervienen, como se sabe de manera hegemónica, esos grupos de la burguesía monopolista internacional. Han variado las formas de relación entre estos grupos y los peruanos burgueses, en el dominio del capital a lo largo de este siglo. Hasta los comienzos de la última postguerra, esa relación era de carácter semi-colonial, ya que los grupos de burguesía pe-

ruana controlaban no solamente una parte menor del capital, sino que lo hacían de manera separada aunque en los mismos rubros económicos, y para el mismo destino, de lo cual se derivaba una política estatal que garantizaba la reproducción de esa situación. Posteriormente, se fue definiendo una nueva forma de relación, consistente en una asociación de intereses en las mismas empresas y grupos de capital, ocupando los peruanos una posición minoritaria y subordinada.

El régimen "velasquista" inició, dentro de esa tendencia, una modalidad de asociación a través del capital estatal, y durante un tiempo con la pretensión de hegemonía de este último. Actualmente, redefinido por el momento, el lugar del capital estatal en el conjunto de este en el país, la relación predominante entre la burguesía peruana y los grupos de burguesía internacional, es la de una asociación profunda en el dominio del capital, a través de su forma privada principalmente, pero también vía su forma estatal, ocupando en esa asociación una posición minoritaria y subordinada.

Así, en tanto que "funcionarios" del capital —como Marx decía— el conjunto de los integrantes de la burguesía en el Perú son tanto peruanos como internacionales, con el predominio de los últimos.

Este hecho introduce discontinuidades y contradicciones, entre el condominio del capital y su representación política en el Estado, ya que legalmente sólo los peruanos pueden ocupar un lugar en el gobierno del Estado. Pero esas discontinuidades, siendo eventualmente importantes como lo demostró el propio régimen "velasquista", son sin embargo principalmente externas, esto es superficiales en cuanto al comportamiento político de la burguesía como clase.

De un lado, porque, sobre todo ahora, los representantes de los intereses de los grupos de burguesía internacional forman parte de las mismas organizaciones gremiales con los grupos burgueses peruanos y en consecuencia participan predominantemente en la definición de las políticas de esos organismos. De otro lado, porque las condiciones de la asociación implican que los burgueses peruanos asumen en el Estado o fuera de él, la representación del conjunto de los intereses asociados. Y, finalmente, porque los representantes de los grupos de burguesía internacional influyen en el Estado, además a través de mecanismos informales pero directos.

Sin embargo, esa composición en el dominio del capital en el Perú, implica otras discontinuidades, probablemente más decisivas que las anteriores. Y es que los grupos de burguesía internacional que operan en el país, están aquí representados por sus administradores y por sus socios peruanos, pero no habitan —social, cultural, psicosocialmente— la sociedad peruana. En consecuencia, la densidad del capital y su dominio en la economía peruana, no es equivalente a la densidad de la burguesía como grupo social concreto en la sociedad, con todo lo que eso conlleva como dificultad para el aburguesamiento social, cultural, ideológico, del conjunto de la sociedad.

Es, sin duda, éste uno de los factores decisivos que permiten la continuidad de formas de relación social y de valores pre-burgueses o transicionales,

que afectan a capas amplias de la sociedad peruana aún cuando las relaciones de producción en que aquellas participan, han asumido ya definitivamente un carácter capitalista. La economía es capitalista, pero la sociedad no es burguesa en la misma medida. Probablemente, eso está en el fondo de la persistencia de orientaciones ideológicas que atraviesan aún a gran parte de la izquierda peruana, para la cual el Perú como formación social es básicamente semi-feudal y la revolución, en consecuencia, democrático-popular. Y, por supuesto, a eso se llama "maoísmo".

Así pues, la clase burguesa en el Perú no se agota en el grupo social concreto de burgueses peruanos, y administradores del capital internacional. Como grupo social concreto, es básicamente peruano y es débil. Como representación de clase, es decir como representación de intereses sociales, que engendran matrices de comportamiento, es interna e internacionalmente fuerte. Esta condición contradictoria, entre debilidad de grupo y su fuerza de clase, permite explicar muchas de las dificultades de la burguesía para organizar de modo estable su dominación política en el Perú. Y no debe, por eso, ser omitida en el examen de los problemas nacionales, porque de otro modo no podríamos entender, plenamente, el carácter de las relaciones entre nuestra formación social y el orden capitalista internacional del que forma parte, entre el imperialismo y la dependencia.

LA RECOMPOSICION DE LA BURGUESIA. CARACTERISTICAS Y TENDENCIAS

Dentro del conjunto de cambios de la sociedad peruana que van produciendo la iniciación de un nuevo período histórico de las luchas de clases y que se generaron principalmente durante el régimen velasquista, una parte de los más decisivos para las tendencias de profundización de los conflictos sociales como conflictos de clase se refieren al reajuste de las bases mismas de la existencia de la burguesía como clase y a las tendencias que definen su estructura interna y sus relaciones con otras capas y clases de esta sociedad.

Esos reajustes tienen el sentido de una recomposición, tanto de sus bases en la estructura del capital por efecto de las reformas realizadas, como de las tendencias de articulación de la clase y de las correlaciones de fuerza entre sus varias fracciones, que dependen de esa reestructuración de sus bases y de las corrientes de organización e ideología que provienen de épocas previas; todo esto se encuentra condicionado por las características que va asumiendo este nuevo período, es decir, por las necesidades derivadas de la profundización de sus conflictos con el proletariado.

De ahí que esta recomposición de la burguesía se opere simultáneamente en diversos planos entrecruzados. Y, desde luego, de manera contradictoria con las manifestaciones específicas que provienen de la estructura extremadamente desigual y combinada del capital en el Perú, así como de las modalidades históricas que va alcanzando la lucha de clases.

Se puede distinguir cuatro planos que se entrecruzan en este proceso de recomposición de la burguesía en el Perú.

1. La homogenización histórico-social

Se alude aquí al hecho fundamental de la eliminación de los sectores oligárquicos de la burguesía (gran burguesía agraria, financiera y comercial, principalmente, y grupos de mediana burguesía de los mismos rubros, asociados a aquella), en tanto que fracciones concretas dentro de la clase y tendencias ideológico-políticas correspondientes, como consecuencia de la erradicación de sus bases materiales de existencia, por la reforma agraria y financiera, fundamentalmente, pero también por la reforma de la prensa y otras menores. Al mismo tiempo, se ha intensificado, aunque no agotado, la desintegración y extinción de los terratenientes gamonales como clase. Ambos hechos eliminan también las alianzas político-sociales entre esos dos sectores sociales que aunque ya en declinación y desintegración todavía representaban en el país una fuerza político-social discernible antes del "velasquismo", y que previamente a la Segunda Guerra Mundial constituían el eje mismo de la coalición de poder dominante en esta sociedad, bajo la tutela de la burguesía imperialista, todos ellos controlando oligárquicamente el Estado.

Esos hechos significan que la burguesía que se mantiene y que emerge de este proceso, se ha homogenizado social e históricamente. Ahora se trata de una burguesía moderna, básicamente industrial-urbana, dominando una estructura de capital en donde las bases semi-coloniales de su reproducción tienen un peso muy poco significativo, con todo lo que eso implica para la entera estructura de la formación social peruana. Emerge de la ruptura y tramonto de un ciclo histórico y depurado de sus sectores aún ligados, aunque ya de manera parcial y contradictoria, a las bases moribundas del ciclo anterior.

2.— La concentración de poder

Una de las características sustantivas del proceso del capital, bajo el régimen militar, ha sido la intensificación de su concentración: es decir, su monopolización.

Tal concentración ha sido, en parte, la consecuencia del desarrollo de las tendencias immanentes del capital, especialmente por la presencia del capital monopolístico internacional en el dominio del país. Pero ha constituido, también, el resultado de la propia acción política del "velasquismo", ciertamente no ajeno a esas tendencias immanentes; sin embargo, esta concentración es mucho más el producto de las tendencias históricas del conflicto político social en el Perú, que del grado de maduración interna de las fuerzas productivas del capital en esta economía subdesarrollada.

El proceso de concentración de capital, por estos factores, se ha llevado a cabo a lo largo de dos canales: la formación y expansión del capital estatal, y la intensificación de la concentración de capital privado. Las relaciones contradictorias que se

establecieron entre ambos canales, por el momento se van redefiniendo por la reducción del ámbito del capital estatal y las modificaciones en su articulación con el capital privado, en un sentido favorable a este último, bajo el nuevo régimen militar. Sin embargo, ni económica, ni políticamente, es un interés de la burguesía y de su representación tecnocrática hoy en el gobierno, el desmantelamiento del capital estatal. Y, eso, como después veremos, tendrá implicaciones importantes para las relaciones entre la burguesía y el Estado.

Lo que importa, por el momento, es dejar establecido que el lugar de los grupos monopólicos de la burguesía en el Perú, se ha fortalecido sobre la base de la amplia e intensa concentración de capital en sus manos, tanto en forma privada como estatal. Y que en este proceso, la representación de los intereses del capital internacional, adquiere también un peso y una connotación no solamente mayores sino nuevas, en el carácter de clase de la burguesía en el Perú, especialmente por el hecho de que la asociación es hoy la modalidad central de las relaciones entre burgueses peruanos e internacionales, en el dominio del capital, dentro de las cuales los primeros tienen una posición subordinada. A eso debe añadirse, como luego veremos, la ahora más profunda integración del capital en el Perú, dentro del capital internacional.

3.— *La mayor articulación orgánica*

El reajuste y expansión de las bases de la acumulación de capital, que signó el proceso de cambios introducidos por el régimen militar, no ha sido ciertamente suficiente como para asegurar y culminar la integración de todos los sectores de la economía en un circuito interno de acumulación, y mucho menos, por supuesto, para lograr —como era la imagen ideológica publicitada por el "velasquismo"— que el circuito se integrara sobre bases autónomas respecto del capital monopólico internacional.

Sin embargo, no es menos cierto que actualmente, a diferencia de los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y, todavía, a fines de la década de los cincuenta, se puede registrar la presencia efectiva de un circuito interno de acumulación de capital en el que se integran, aunque aún precariamente, todos los sectores de actividad económica. Ese circuito, como tal, está bajo el dominio del capital monopólico internacional e interno, asociados. Y es tanto que su articulación es todavía precaria, sus principales sectores de acumulación (minería, agricultura de exportación, harina y aceite de pescado, y ciertas ramas fabriles) se integran también por separado al circuito internacional de acumulación, al mismo tiempo que al interno. Es decir, esos sectores no se incorporan al circuito internacional sólo a través de su integración al circuito interno. Por esas razones, se trata de un circuito interno y no de uno nacional —salvo administrativa y legalmente— y aún en vías de consolidación.

La clara ausencia de un circuito interno de acumulación, fue una de las bases del tipo de acumulación semi-colonial que caracterizaba el capitalis-

mo en el Perú, entre comienzos de siglo y la segunda guerra mundial. Ese constituyó el fundamento de la burguesía oligárquica y de sus alianzas con los gamonales y sus formas de subordinación, sin asociación, con la burguesía imperialista de ese período.

En la medida en que la conformación de ese circuito interno de acumulación, ha sido históricamente ubicada en el período de maduración del capital monopólico, y de los mecanismos de fusión y asociación correspondientes, las empresas capitalistas han ido asumiendo también un doble carácter: unidades de producción y grupos de capitalistas, al mismo tiempo. Y en lo segundo, surgiendo en el control de varias unidades de producción, en diversas ramas y sectores de acumulación.

De ello se sigue el hecho de que la burguesía en el Perú actualmente está no solamente más profundamente articulada entre sus varios componentes, sectores y estratos, por la mayor integración del capital en su conjunto, sino también porque se ha ido rearticulando y reorganizando, formando nuevos tipos de grupos de capitalistas, especialmente monopolistas.

Sin duda, lo que mejor expresa esta nueva tendencia de articulación orgánica de la burguesía, por su ubicación en la estructura del capital, es el fortalecimiento y tecnoburocratización de sus organismos gremiales, hasta el punto de haber podido ir surgiendo como los principales organismos de articulación y expresión política durante el actual período. Es decir, la burguesía en el Perú tiene ahora una mayor organización gremial y cada gremio tiene también una mayor organicidad.

Durante el período posterior a 1968, el fortalecimiento de las organizaciones gremiales de la burguesía, prolongó y maduró, de una parte, las tendencias que ya venían desarrollándose como respuesta a sus propias necesidades económicas y tecnocráticas, de manejo de una estructura cada vez más compleja del capital. Pero, de otro lado, parece también probable que la burguesía se viera obligada al mayor desarrollo de su organización corporativa, en la medida en que no disponía de mejores canales de relación con el Estado y de influencia en él, en un régimen donde los mecanismos previos (parlamento, prensa, grupos de presión extragremiales, etc.) estaban ausentes.

Por esas últimas razones, probablemente, las más importantes organizaciones corporativas de la burguesía, se fueron transformando en los años recientes, en centros de articulación política interna y en foros cuasi-parlamentarios de relación con el régimen militar, como el CADE.

Así, ADEX, CONACO, FEDECAMARAS, SOCIEDAD DE INDUSTRIAS, SOCIEDAD DE MINERÍA, SOCIEDAD DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS MINEROS, ASOCIACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS AGRICULTORES, han sido durante este período no solamente fortalecidos orgánicamente, dejando de ser mimbres para uso de algunos figurones burgueses de cada sector o comités de vida en general precaria, sino que se convirtieron en centros de discusión y decisión política de sectores o estratos burgueses importantes, ejerciendo una presión

política suficientemente fuerte como para obligar al régimen a ceder posiciones (como en el enfrentamiento con los "agricultores") o a reaccionar con la represión (caso de la Sociedad de Industrias y Duarte). Y todo ello, permitiendo al conjunto de la burguesía aglutinarse detrás de un organismo global, como el CADE anual, que se convirtió en el foro central de las discusiones entre la burguesía, la tecnocracia administradora del capital estatal y las autoridades políticas del régimen militar.

Durante todos estos años, la burguesía no se organizó, ni se dirigió, ni se expresó principalmente por los partidos políticos a su servicio. Y desde la expropiación de la gran prensa y su estatización de facto, tampoco pudo servirse de ese instrumento de presión. Fueron sus principales organizaciones corporativas que le sirvieron a la clase, como su instrumento de organización, de cohesión y de debate, y de relación con el Estado.

Todo ello, pues, da cuenta de un notable desarrollo de la capacidad de articulación interna de la burguesía en el Perú, sectorial y colectivamente, sobre la base de su nuevo lugar en la estructura del capital y de las exigencias concretas del contexto político.

4.— *La mayor integración con la burguesía internacional*

Esto es, quizás, más obvio y no tenemos que insistir sobre ello. Baste aquí señalarlo, y mencionar sus bases. A la hora del desarrollo de una tendencia de Integración Internacional de importantes sectores de la burguesía —a través no sólo de la internacionalización del capital, sino de su expresión institucional en las grandes empresas mundiales— las burguesías de países como el nuestro no pueden quedar al margen de esa tendencia. Aunque, por ser un país como éste, es decir, un capitalismo en que las contradicciones del capital y de su sistema adquieren connotaciones extremas, la más profunda integración de la burguesía en el Perú dentro de la burguesía internacional, en todas sus formas de asociación privadas y estatales, implica también más agudas contradicciones.

Lo que aquí debemos señalar es que la asociación de la burguesía en el Perú con la burguesía internacional, tiene un doble eje: privado y estatal. Bajo el "velasquismo", se intentó hacer del último el eje central; más aún, apuntando a la prevalencia del capital estatal en esa asociación. Sus límites están ahora a la vista. Pero las exigencias estructurales que la existencia de ese doble eje implican que las relaciones internacionales de la burguesía en el Perú difícilmente podrán contenerse en esos límites, atendidas las características y las tendencias de la crisis actual del capitalismo. Entre otras cosas, por el carácter contradictorio que van asumiendo las relaciones entre los Estados-Nación y las empresas "multinacionales", ya que en ellas se intersecta toda la trama de las exigencias del desarrollo del capital internacional y de la lucha de clases de que depende cada Estado-Nación.

LAS CONTRADICCIONES Y LOS LIMITES DE ESAS TENDENCIAS

Hemos visto que la actual burguesía en el Perú asume concretamente, una conformación bien distinta que en periodos anteriores. Homogenizada, articulada internamente de manera más orgánica, en torno de un eje de poder monopólico creciente, y más integrada con la burguesía internacional.

Sería fácil derivar de allí la imagen de una clase social coherente, fortalecida bajo dirección unificada y centralizadora, capaz de reorganizar el Estado a la medida de sus nuevas necesidades de dominación. Y nada sería más alejado de la realidad. Nada tan peligroso como subestimar su fuerza de clase. Pero no tanto como sobrestimar su destino estratégico.

Las objetivas tendencias registrables que caracterizan la recomposición de la burguesía en el Perú, sólo pueden manifestarse contradictoriamente, atravesadas por los fenómenos resultantes del propio pasado de la clase, es decir, de su anterior situación en el complejo de las relaciones de clases, por las crecientes contradicciones de la estructura del capital, interno e internacional, y por los condicionamientos derivados del curso actual de las luchas de clases.

La homogenización histórico-social es real respecto de los sectores oligárquicos de la clase. Pero no puede abarcar el problema de la heterogeneidad resultante de la desigual y combinada estructura del capital en el país, en la cual se articulan los sectores de capital integrados al circuito internacionalizado, las fracciones de capital monopólico cuya articulación con aquél es inexistente o precaria, los estratos de capital competitivo y las formas todavía en curso de acumulación primitiva. Todo lo cual produce una necesaria heterogeneidad de la ubicación de los varios sectores y estratos de la burguesía en esa estructura.

Por eso mismo, la tendencia a la concentración del poder, como una virtualidad centralizadora de la articulación interna de la clase, tropieza con esa heterogeneidad de intereses específicos de sus componentes, con la precariedad de la integración del circuito interno de acumulación, que traba esa misma tendencia hacia una mayor articulación interna de la clase, así como su articulación internacional, se enfrenta con las contradicciones y conflictos que, en el seno mismo de la burguesía monopólica imperialista, produce el estallido y profundización de la crisis actual.

LAS IMPLICACIONES POLITICAS DE ESAS TENDENCIAS Y DE SUS CONTRADICCIONES Y SUS LIMITES

El conjunto de las tendencias señaladas, implica, en primer lugar, la base de una posibilidad de surgimiento de un eje de hegemonía política dentro de la clase, bajo el comando de sus grupos monopólicos. Esa tendencia virtual podría, además, cobrar mayor gravitación por el hecho de que el comportamiento político de la clase estará en adelante condicionando ante todo por la profundización

de sus conflictos con el proletariado, si éste desarrolla su actual proceso de emancipación política y de organización política como clase diferenciada.

Esto establece una diferencia decisiva con la situación previa al proceso iniciado en 1968. Allí, la diferencia existente entre los sectores oligárquicos de la clase y los sectores modernos, tecnocráticos, generó la ausencia de cohesión política de la burguesía, y con ella la necesidad de conflictos y de compromisos que impidieron el surgimiento de un eje de hegemonía política dentro de la clase y en el Estado.

Y aquella situación, permitió y obligó una presencia excepcionalmente destacada de las capas de mediana y pequeña burguesía, y en especial de los grupos intelectual-profesionales y burocráticos procedentes de esos sectores, y de sus representaciones políticas, como intermediadores políticos y tecnocráticos entre esas fracciones en compromiso conflictivo dentro de la burguesía y entre el conjunto de ésta y las clases explotadas.

La burguesía, en su conjunto, y cada uno de sus fracciones principales tuvo en consecuencia que vincularse a esas capas y a sus representaciones políticas, a negociar con ellas sus reivindicaciones particulares (las de esas capas), como precio de ventajas en las cuotas de coparticipación en el poder económico y político que podían lograrse a través del Estado.

La brecha creada en la cohesión de la coalición oligárquica, al afirmarse la implantación de la dominación imperialista semi-colonial, y cuyo punto de estallido fue el golpe leguista de 1919, la ruptura del hasta entonces poderoso Partido Civilista, la posterior liquidación de todos los partidos históricos de la burguesía y de todos los componentes de la coalición oligárquica de entonces, no solamente llevó a la consolidación de la condición semi-colonial de la burguesía predominante en esa coalición oligárquica, sino también, por eso mismo, a la pérdida de toda su capacidad para elaborar proyecto nacional alguno, liquidados sus intereses nacionales, y, en consecuencia, eliminada su capacidad de organizarse políticamente como clase y aún como fracción de clase significativa.

En esas condiciones, la coalición oligárquica tuvo que enfrentarse a un frente formado por las capas medias emergentes y las clases explotadas, que se desarrolló elaborando una ideología democrático-nacionalista de larga perduración y predominancia entre los trabajadores.

Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, se modifican las bases del capital en el Perú por la formación progresiva de un circuito interno de acumulación, entran en crisis los soportes de reproducción de la anterior estructura, y se va abriendo una nueva brecha dentro de la coalición oligárquica, entre los sectores burgueses y sus aliados fundados en la anterior estructura de explotación y de dominación, y las fracciones burgueses que se levantaban sobre las bases de la nueva estructura en formación. Es decir, entre los estratos de burguesía semi-colonial y los sectores de burguesía que eran integrados como asociados del nuevo capital internacional. Ninguna, en consecuencia, con intereses efectivamente nacionales, por mucho que las exigencias de integración del circuito interno de acumulación tuvieran de algunos ribetes naciona-

listas a grupos minoritarios de las nuevas capas burguesas. Y por eso mismo, otra vez sin capacidad de imponer ninguno de esos sectores su hegemonía a la otra, ni capacidad para organizarse políticamente, ya que ningún proyecto nacional podía estar en sus objetivos.

Por ello, los elementos de un proyecto nacional capitalista, permanecieron anclados y elaborados por las capas medias, principalmente por sus grupos intelectual-profesionales y burocráticos. Pero esta vez, las representaciones políticas de esos estratos encontraban ya un terreno de convergencia con las tendencias internas de la burguesía, aumentando su lugar de intermediación entre los sectores de la clase y entre el conjunto de ella y las clases explotadas. Por lo cual, también, las representaciones políticas de esos grupos, las viejas y las nuevas (APRA, AP, DC), tendieron a una mayor diferenciación, por sus formas diversas de vinculación con los sectores y fracciones burguesas, y se empanaron en esas redes, incapaces, por lo tanto, de hacer valer sus proyectos nacionales, porque para ejercer su creciente función de intermediación política el precio era el compromiso con las diversas fracciones burguesas, en diversas dosis según las condiciones políticas globales del país.

La política burguesa desde la postguerra, fue por eso cada vez más desarticulada y errática, de conflictos y de compromisos entre sus sectores oligárquicos y modernos, de vinculaciones y negociaciones cambiantes con las capas medias y sus representaciones políticas. Todo ello, se expresaba en la creciente crisis del Estado, asediado desde fines de los cincuenta, por el ascenso de las luchas populares. Esas tendencias llegaron a su punto más agudo entre 1963 y 1968, abriendo las puertas al golpe "velasquista".

Las bases históricas que permitieron esa inexistencia de un eje de hegemonía interna de la burguesía y sus implicaciones en el Estado, el anterior tipo de relaciones con las representaciones políticas de las capas medias, están canceladas, por la homogenización de la burguesía, su mayor articulación interna y la gravitación centralizadora de sus grupos monopólicos, internos e internacionales. Y, además, ahora la clase entera comienza a enfrentarse a una efectiva lucha de clases con el proletariado y la propia y ajena experiencia requiere el desarrollo de una mayor cohesión política para ese conflicto.

Hay, pues, la base objetiva para el surgimiento de un nuevo eje de hegemonía política de la burguesía, que debe expresarse en las formas de control y de reorganización del Estado, es decir, de sus formas de dominación política sobre los explotados.

Sin embargo, las tendencias virtuales que esas bases implican, chocan con diversas dificultades para su efectivización.

En primer lugar, con la extrema heterogeneidad de intereses específicos de grupo dentro de la clase burguesa, que se derivan de la heterogeneidad del capital, su dispersión por la precariedad de la integración del circuito interno y los problemas de la crisis actual. Así, dentro de los propios grupos monopólicos de la burguesía, que en su conjunto podrían asumir la dirección política de la clase a través de sus fracciones más poderosas, se instalan

diferenciaciones inevitables. De un lado, su relación con la burguesía monopolítica internacional, asediada por la crisis, implica la variabilidad de las vinculaciones con los diversos grupos imperialistas, por la inestabilidad de las relaciones actuales entre éstos. De otro lado, los grupos monopolíticos de la burguesía en el Perú están muy diferencialmente colocados en la estructura productiva. Unos, en ramas y sectores profundamente articulados a los circuitos internacionales. Otros, al circuito interno y a su estrecho mercado. De modo general, podría decirse que los sectores monopolíticos ligados a la producción exportable y los ligados a la producción para el mercado interno, bajo la crisis no pueden dejar de tener reivindicaciones diferentes sobre la política económica del Estado y de la distribución de recursos. Esos problemas, podrían ser subordinados a la defensa global de la clase sólo en condiciones extremas del conflicto de clases. Entre tanto, dificultarán los acuerdos de repartición del poder del Estado.

En segunda instancia, esas mismas diferenciaciones atraviesan a los estratos de mediana y de pequeña burguesía solvente. Unos grupos están vinculados a los sectores de acumulación exportables, producen insumos para ellos o comercializan su producción. Otros grupos, están relacionados con los sectores de acumulación que se basan en el mercado interno y en el circuito interno en general, sea subordinados a los grupos monopolíticos en las mismas formas que los otros sectores o de manera independiente.

En tercer lugar, se establecen diferenciaciones de interés entre los estratos monopolíticos y los medios y pequeños, en tanto que existe una masa dispersa de capital mediano y pequeño, fundado en el circuito interno, y que opera de manera aún independiente respecto de los grupos monopolíticos. Eso implica reivindicaciones específicas de esas capas medianas y pequeñas sobre el Estado, que tenderán rápidamente a desarrollarse conforme la crisis se mantenga o se agudice.

Igualmente, la burguesía urbana-industrial, en todos sus estratos requiere una política agraria y comercial que permita mantener bajos los costos de reproducción de la fuerza de trabajo urbana, y eso choca, ya está chocando, con los intereses de la mediana y pequeña burguesía agraria, ampliada y en vías de consolidación pos-reforma agraria.

Finalmente, todo eso trae como consecuencia, que sea inevitable para la burguesía en su conjunto y para cada una de sus fracciones, ahora o más tarde diferenciadas, la negociación y el compromiso con las representaciones políticas de las capas medias, y en particular de sus grupos tecnocráticos, tanto para ampliar sus respectivas bases de pretensión a la hegemonía en el Estado o para hacer valer sus reivindicaciones de grupo; es decir, hay que negociar las propias reivindicaciones de las fracciones de la clase, las de los propios grupos tecnocráticos políticamente organizados, las que incluyen concesiones parciales a las clientelas populares indispensables. Y ciertamente, esos grupos tecnocráticos tienen ahora una reivindicación excepcionalmente importante: lugar en la administración del capital estatal ya constituido, porque éste es el terreno privilegiado de su papel político, de sus posibilidades de intermediación dentro de la burguesía y

entre ésta y los explotados. En suma, de su lugar en el poder.

Y aquí es, por todo ello, donde entran con todas sus consecuencias los hechos provenientes del pasado: la existencia de formaciones políticas que, aunque ahora al servicio del capital de manera abierta, incluyen inevitablemente para su ejercicio clientelas populares con sus propias exigencias, no fáciles de obtener en tiempos de crisis; la remanencia en esas formaciones de elementos de proyectos democrático-nacionalistas, que aunque agotados en sus posibilidades, aún orientan la conducta concreta de algunos de sus sectores de base. Y, por encima de todo, su vigente condición de ser las únicas estructuras políticas organizadas con capacidad de lograr, aún si sólo fuera parcialmente, el encuadramiento de las masas en todo nuevo orden político burgués legalizado. En particular, el APRA y secundariamente Acción Popular. Y, junto a ellos, inclusive aún posibles sectores dentro de los rangos medios de las fuerzas armadas.

La propia burguesía, como tal, y en particular sus grupos monopolíticos no tienen ahora y no podrán tenerla, capacidad de organizarse políticamente por fuera de esas organizaciones previas, por su radical carencia de todo posible proyecto nacional, sobre intereses nacionales.

Es, pues, el complejo de esta situación y de esas tendencias contradictorias, lo que obligará en los hechos a que la hegemonía de los intereses monopolíticos, busque ejercerse en el Estado mucho más a través de formas crecientemente arbitrarias, que vía los mecanismos institucionales legalizados, porque éstos importan la puesta en acción de todas estas contraposiciones y redes de negociación, de conflicto y de compromiso, en particular por el reivindicacionismo obligado de las capas medias, de capital y de tecnocracia, sobre el Estado.

Si a eso se combinan las prestaciones resultantes de la profundización de las luchas de los explotados, una conclusión salta a la vista: la debilidad intrínseca de toda posibilidad de elaborar un proyecto coherente y estable de reorganización de la estructura del Estado, es decir, de un orden político institucional capaz, al mismo tiempo, de expresar las correlaciones de fuerzas dentro de la burguesía y de encuadrar en sus redes las luchas de clases.

Otra conclusión, igualmente decisiva, se desprende de la anterior: la debilidad intrínseca de toda posibilidad de relegitimar y estabilizar un orden democrático burgués suficientemente abierto.

Esto implica, por eso, la debilidad estratégica de la burguesía en el Perú, por lo demás común a la gran mayoría de la burguesía en América Latina: prisionera de sus contradicciones intestinas, de las redes provenientes de periodos anteriores, de las contradicciones crecientes del capital internacional, de las urgencias de la lucha de clases, la burguesía en el Perú no puede dejar de oscilar entre el autoritarismo y la democracia, aún si logra iniciar un corto periodo de apertura democrática, y tender cada vez más hacia la estabilización de la violencia repressiva, como respuesta a sus necesidades, incapaz de elaborar y de sostener un proyecto político alternativo coherente.

LA DIFERENCIACION POLITICA DE LAS CAPAS MEDIAS Y EL DETERIORO DE LAS BASES DE LA INTERMEDIACION POLITICA

Uno de los más importantes e ilustrativos fenómenos políticos de la historia peruana posterior a los años treinta, ha sido el papel especialmente relevante de las capas medias, primero como cabeza de una coalición de fuerzas democráticas y nacionalistas frente a la coalición oligárquico-imperialista, y posteriormente como factor de intermediación política entre la burguesía y los trabajadores y entre los propios sectores de la burguesía.

Acaso mejor que ningún otro elemento, éste expresaba en cada uno de esos momentos, la inmadurez del proceso de depuración del carácter básico de las relaciones de clases, los desgarramientos internos dentro de la coalición dominante y la inmadurez del desarrollo político del proletariado peruano. Y en todo eso se ha fundado, hasta no hace mucho, inclusive el estilo "jacobino" del intento velasquista de solución de los problemas del capitalismo peruano, como respuesta a la agudización de los enfrentamientos de clases.

Eso también ha sufrido un cambio decisivo. No solamente no hay más lugar alguno en este escenario, para ninguna bandera antioligárquica equivalente a la de los años 30-50 y sus implicaciones nacionalistas. No hay tampoco ya lugar suficiente para una tentativa de intermediación efectiva entre la burguesía, tal como la acabamos de ver, y el movimiento obrero y popular tal como ahora se reorienta. Apenas, queda espacio importante para las necesidades burguesas de intermediación tecnocrática entre sus principales fracciones, a través de la administración estatal.

La depuración de la coalición de fuerzas que era el régimen velasquista, y la descomposición de sus restos, revelan los límites históricos, el agotamiento de las bases socio-políticas del papel político de las capas medias en el Perú. Así como lo que ese régimen pudo hacer, demostraba la gran importancia de esas bases. Reconocimiento y requiem, para una historia de medio siglo.

El proceso de depuración de la estructura básica de la formación social peruana en la dirección capitalista, esto es, de las relaciones de clases, convergió históricamente con la crisis internacional e interna del capitalismo, con la crisis del reformismo obrero burocrático a nivel internacional e interno, con la crisis del Estado en el Perú y en gran parte de América Latina, con el desplazamiento de las luchas de clases hacia los centros mismos del orden capitalista. Fue, pues, un proceso tardío en relación a las expectativas de la moderna burguesía y de las capas medias en el Perú: consolidar las bases políticas de un régimen democrático-burgués moderno, legitimado en el consenso popular, apto para encuadrar en su legalidad las luchas de los explotados, duraderamente.

La destrucción de las bases del Estado oligárquico en crisis, no abre las puertas a un Estado burgués democrático estable, por mucho que aún se lo intente. La estatización de una parte considerable del capital, ideológicamente intentado como formación de capital nacional, no melló sino acentuó

la dominación del capital monopolista internacional. El llamado a la integración corporativa de los trabajadores al nuevo Estado burgués, intentando por medios pacíficos, con técnicas de manipulación de origen populista y argumentado por una práctica conciliatoria (comunidades laborales, propiedad "social", etc.) se estrelló contra los límites inevitables del subdesarrollo y de la crisis, enfrentando la resistencia de las masas, y perdiendo todo tipo de legitimidad para la mediación burocrática de las capas medias entre el capital y el trabajo.

Las capas medias han forzado, queriéndolo y sin querer, a la recomposición sociopolítica de la burguesía, pero también tuvieron que enfrentarse al avance de la emancipación política del proletariado. En consecuencia, la burguesía así recompuesta deja de estar a la larga interesada en el mantenimiento de la democracia y de las formas y bases políticas que ésta implica para la intermediación política de las capas medias entre burguesía y proletariado. Para las capas medias la pérdida de este papel en nuestro escenario, es el paradójico precio de su propia obra. Y lo pagará aún más caro en adelante, si no hay una derrota profunda del proletariado.

Esta es, cuidado, una tendencia cuyas bases no están aún plenamente definidas. Pero que ya está activa claramente y sus efectos en la situación y la conducta de las capas medias es observable: el inicio de una irreversible diferenciación política en el seno de las capas medias, entre tendencias de un más profundo sometimiento a los intereses políticos de la burguesía, que se expresa en la radicalización ideológica anticomunista, autoritaria y represiva, frente a tendencias que, aunque vacilantemente, se orientan hacia el campo político popular, con ya importantes sectores que avanzan hacia una definición socialista, esto es, hacia el campo concreto del proletariado.

La descomposición del velasquismo y la depuración de las fuerzas armadas, así como la actual posición del Apra y otras formaciones equivalentes: son los indicadores más concretos de estas tendencias.

Por todo ello, también, no existe en el Perú la posibilidad de que se reproduzca, como algunos sectores hoy día parecen esperar, una situación semejante a la que el movimiento peronista supuso en la Argentina, como un marco político desde cuyo interior se van produciendo las polarizaciones de fuerzas políticas, incluyendo al proletariado y las capas medias. En el Perú, las fuerzas que se desprenden del velasquismo en una dirección radical, hasta tanto no se liberen de sus equívocos y trampas, no pueden constituir sino una tendencia paralela y parcialmente convergente con las fuerzas revolucionarias fundamentales que se desarrollan por fuera, independientemente y desde orígenes más depurados política y socialmente.

Eso, sin embargo, dependerá en lo fundamental de cuán rápida y fuertemente se desarrollen las alternativas políticas independientes del proletariado, de modo que el actual margen más o menos importante de maniobra de las tendencias radicales de las capas medias, se vaya convirtiendo en un terreno de maniobra táctica secundaria del proletariado y no en una arena de confusión y de desviación estratégica, como la que el Apra significó en los años treinta, a la muerte de Mariátegui, o el peronismo en la Argentina.

LA GRAVITACION DE LAS OTRAS CAPAS DE EXPLOTADOS HACIA EL CAMPO POLITICO DEL PROLETARIADO

La generalización del capitalismo, produce en el país una masiva liberación de mano de obra, pero por la monopolización del capital y la precariedad de la integración de la estructura productiva, la gran masa de esa población trabajadora no se proletariza plenamente permaneciendo en condición de semi-proletariado, y manteniéndose una franja amplia de campesinado cuyas relaciones con el capital se redefinen con la desintegración de las relaciones serviles y semiserviles. Y la "terciarización" típico efecto del capital monopolista en la economía, que en las condiciones del subdesarrollo se extrema, engruesa constantemente un contingente de capas medias asalariadas de bajos ingresos y capas pequeñoburguesas vegetativamente pauperizadas, especialmente en los centros urbanos.

La experiencia de los años recientes ha llevado al grueso de todas estas capas de explotados y de dominados, a radicalizar su enfrentamiento con el capital, aunque todavía muchos sectores ideológicamente lo traduzcan como ant imperialismo nacionalista y antioligárquico, debido a la inmadurez del desarrollo del socialismo revolucionario en el país. En especial entre las capas medias asalariadas, y entre sectores de semiproletariado urbano y rural, la lucha por los intereses sectoriales de carácter reivindicativo, los ha ido llevando a converger con posiciones revolucionarias y se han formado en su seno amplios núcleos y cuadros de definida posición socialista. Y aún el campesinado, tocado ya desde hace años por la influencia ideológica revolucionaria de origen urbano, parcialmente se organiza en conexión con tendencias de orientación revolucionaria. Es la vasta capa de pequeña burguesía pauperizada en las ciudades, sin duda, la menos tocada por esta influencia, por su carácter disperso y su propia orientación social, pero sus recientes luchas iniciales la pueden llevar a organizarse bajo las banderas del socialismo, si las fuerzas revolucionarias son capaces de desarrollar su acción en esa dirección.

Así, el paso creciente del proletariado al primer plano de la escena política peruana, como en todos los países de América Latina, y el endurecimiento de la explotación capitalista monopolista, producen en la estructura de nuestra sociedad tendencias hacia la formación del frente político del proletariado. Esta es aún una tendencia incipiente y difusa, y no puede materializarse sin el desarrollo de una madura alternativa organizada de esta clase. Pero las bases objetivas para ello están planteadas.

Es importante señalar, en relación a este problema, como se está redefiniendo la relación entre

capital y campesinado, a través de formas directas de explotación de la producción campesina en beneficio de las necesidades de abaratamiento de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo propia del capital, a diferencia de etapas anteriores en que esa relación era mediada por la presencia de los terratenientes señoriales o gamonales.

De ese modo, las bases de una convergencia política entre los intereses del campesinado y los del proletariado y semiproletariado, son diferentes que antes, pero son a la vez mucho más precisas, porque se trata de un mismo enemigo depurado y no de un doble enemigo, cuyas articulaciones no eran visibles claramente y de lo cual se derivaban las características ambivalencias de la conducta campesina de las propias capas medias radicalizadas.

Sin embargo, debe tenerse presente que dada esa situación, una parte importante del campesinado converge en sus intereses con los del capital, orientándose hacia una propensión pequeñoburguesa, como en el caso de las capas de campesinos medios y ricos que junto con aquellas ya claramente medianas y pequeño burguesas, serán sin duda la base social del sostén del capitalismo en el campo, y en particular a través del Estado.

Por eso mismo, sólo una política claramente ordenada en una línea de clase, anticapitalista, podrá efectivamente atraer hacia el campo revolucionario a las capas más deprimidas del campesinado.

De todo esto, se desprende claramente que en el proceso de cambios de la estructura de la sociedad peruana, están estableciéndose las bases del desarrollo de nuevas correlaciones de fuerzas, en una dirección de profundización y organización diferenciada de los intereses de clase, que la maduración de la alternativa revolucionaria organizada del proletariado tenderá a ir convirtiendo en un proceso de polarización política.

Cuando sostenemos el ingreso de los luchas de clases en el Perú en un período histórico nuevo, marcado por las tendencias de profundización de los enfrentamientos diferenciados, y dentro del cual es necesario insertar, para entenderla, toda coyuntura de aquí en adelante, no estamos expresando nuestros deseos o construyendo para esas expresiones un esquema irreal. Apuntamos al reconocimiento de los desplazamientos objetivos en la situación y en las relaciones de las clases principales y de las capas subalternas del conjunto de las sociedades.

La profundidad de la ofensiva actual de la burguesía no se podría comprender fuera de este marco, así como la situación de empantanamiento coyuntural del proletariado no podría entenderse sin referirse a todo lo que desde el pasado cristalizó en el dominio político del reformismo y del oportunismo, pero cuyo fracaso actual implica un punto más alto de partida para el desarrollo revolucionario de la clase.

Las Perspectivas de la Recuperación Económica

FELIPE PORTOCARRERO

Las dificultades del "Plan de Recuperación Económica" del régimen de Morales Bermúdez y el ahondamiento de las discusiones en el seno de la conducción económica del gobierno y la burguesía reflejan un hecho concreto: la agravación en 1977 de la crisis económica, que ha contrariado las optimistas previsiones oficiales.

Es importante subrayar que esta crisis asume unadimensión tanto coyuntural como estructural. En efecto, se manifiestan agudos desequilibrios económicos en el corto plazo como la profundización de la recesión, la persistencia de fuertes presiones inflacionarias, el deterioro del salario y la reducción del empleo, la mantención de un elevado déficit fiscal y un grave desbalance en la balanza de pagos del país. Al mismo tiempo, a mediano y largo plazo el panorama de la economía nacional se va oscureciendo como consecuencia de la nueva fase de estancamiento y crisis en la que ha ingresado el capitalismo internacional así como de la insuficiencia del esfuerzo de inversión realizado en los años setenta y la agravación de los desequilibrios intersectoriales, factores que se examinarán con mayor detalle más adelante.

Es claro, sin embargo, que esta situación determina que una eventual recuperación de las dificultades coyunturales asuma un carácter más precario y desigual, tornando problemático el logro de un período de acumulación acelerado y equilibrado a mediano plazo. Más aún, es posible que dicha recuperación constituya sólo el prologo a una más profunda crisis.

De ahí que el papel central que ha pasado a ocupar la crisis económica en la evolución social y política del país torne imprescindible su análisis, como base para evaluar los ritmos y plazos de una posible recuperación, así como para delinear las perspectivas económicas a mediano plazo, fenómenos que constituirán, sin duda, un condicionante significativo de las luchas de clases en el Perú.

1. LA CRISIS DE 1974-77

Los problemas coyunturales que confronta la economía peruana se definen por la convergencia de una significativa crisis interna con la recesión internacional de 1974-75, que alcanzó una profundidad no registrada desde los años 30. De esta manera, el aparato productivo nacional ha ingresado desde la segunda mitad de 1974 en una fase de crisis, culminando así la expansión iniciada en 1970.

El análisis de la actual crisis requiere precisar la convergencia y articulación de los factores internos y externos, que la diferencian de anteriores recesiones. En períodos previos la naturaleza fundamentalmente primario-exportadora de la economía, y el aún débil y fragmentario desarrollo de un circuito interno de acumulación, determinaban que el ritmo de la actividad productiva nacional se desenvolviera en estrecha dependencia de las oscilaciones del ciclo internacional, condicionando una

pronunciada vulnerabilidad de nuestra economía y una muy reducida autonomía de su ciclo, que se manifestó en las crisis de 1929-33, 1958-59, etc.

Esta situación se iría modificando progresivamente con el desarrollo y diversificación de la economía peruana desde 1950, que ha ampliado y tornado más compleja la base del capitalismo en el país, conduciendo al paulatino predominio del polo urbano-industrial de la economía y al desarrollo de un circuito interno de acumulación. Todo esto determinó que el ciclo interno de la economía peruana fuese adquiriendo una mayor autonomía relativa, especialmente a partir de la década pasada tal como se demostró en la crisis de 1967-68, caracterizada por la gravitación fundamental de los factores internos dentro de un contexto marcado por una coyuntura favorable a nivel internacional.

De ahí la importancia de precisar esta mayor autonomía relativa del ciclo de la economía peruana como condición para analizar adecuadamente el papel y la articulación de los factores internos y externos en la actual crisis. Es claro que reconocer esta mayor autonomía relativa no significa relegar a un segundo plano a los condicionantes externos

que guardan una decisiva importancia en tanto determinantes en última instancia de una economía dependiente como la peruana.

Como se ha señalado, la raíz de la actual crisis se encuentra en una declinación de la rentabilidad del capital originada por varios factores (cf. Felipe Portocarrero "La Crisis y la Política Económica del Capital", *Societal y Política*, N° 5, Nov. 1975, p. 23). Es así que la agravación de la inflación internacional y la recesión mundial de 1974-75 afectaron negativamente a las ganancias, incrementando las transferencias de excedentes en beneficio de los centros capitalistas. El agotamiento del margen de ganancias extraordinarias derivadas de la racionalización del aparato productivo y del mayor uso de la capacidad instalada erosionó la rentabilidad, factor que fue agravado por el desarrollo de una amplia presión salarial y reivindicativa, que refleja el reforzamiento de la organización y capacidad negociadora del movimiento sindical. Igualmente, la profunda crisis pesquera y el estancamiento de la agricultura contribuyeron a la reducción del nivel global de las ganancias, generando significativos desequilibrios intersectoriales y deteriorando la situación de la balanza de pagos. Por último, la imposición de un amplio programa de control de precios en un contexto de inflación creciente recortó la rentabilidad de las empresas públicas y privadas, agravando el ya abultado déficit fiscal producto de la significativa ampliación de la intervención del Estado en la economía, especialmente en actividades de inversión implementadas en asociación con el capital extranjero.

De ahí que la crisis asuma un doble carácter: constituye manifestación de estas contradicciones y a la vez mecanismo "espontáneo" del capitalismo para superarlas temporalmente. En este último sentido el papel fundamental de la crisis es reestablecer la tasa de ganancia a través de la desvalorización de capital, el aumento de la concentración y centralización, el incremento de la tasa de plusvalía, logrado a través de una intensificación del trabajo y de la baja de los salarios, y una serie de otros mecanismos propios al capitalismo. Como consecuencia de esta mejoría de la rentabilidad del capital conquistada en la crisis se sientan las bases de una posterior expansión.

Las dificultades coyunturales por las que atraviesa la economía peruana indican la agravación de las contradicciones del débil capitalismo dependiente del país; forman parte de los problemas enfrentados, en mayor o menor medida, por todos los países de América Latina 1974-77, con la excepción de las naciones exportadoras de petróleo. Sus causas derivan del impacto de la recesión internacional de 1974-1975 sobre la economía regional y de los obstáculos internos, de grado variable, experimentados por estos países.

En el ámbito latinoamericano la crisis ha delineado dos grupos principales. Por un lado, en Chile y Argentina se ha materializado una recesión muy grave entre 1974 y 1976, declinando significativamente la producción y exacerbándose la inflación; se refleja así la magnitud de los desequilibrios acumulados a nivel del aparato productivo y la agudización de la lucha de clases en los países del Cono Sur. Por otro lado, en Brasil, México y Perú se ha logrado amortiguar relativamente la crisis hasta 1976 gra-

cias al uso de un masivo endeudamiento externo y a la extensión de los programas de intervención y control estatal de la economía. Estos expedientes se encuentran hoy agotados: se ha alcanzado un límite en la captación de nuevos préstamos internacionales y la agravación de las contradicciones sociales y políticas han determinado la imposición de una política económica restrictiva, que presenta claras consecuencias recesivas, especialmente marcadas en 1977.

La crisis actual marca así un momento de redefinición de los patrones del crecimiento capitalista dependiente de América Latina, al mismo tiempo que señala el ingreso en un período caracterizado por la multiplicación de los obstáculos y la agravación de la vulnerabilidad de la expansión económica.

2. LA ECONOMÍA PERUANA EN 1976

Contrariando las previsiones oficiales, que anticipaban una expansión del producto del 5.5% (cf. La Crónica, 13 de enero de 1976, p. 6-7), en 1976 se registró un crecimiento de sólo el 3.0%, manifestándose así la profundización de la crisis (*). Más aún, en ese año se agravaron los desequilibrios económicos incrementándose el déficit de la balanza de pagos, acelerándose el alza de precios y estancándose la oferta global de bienes y servicios, con el consiguiente aumento del desempleo y disminución del salario real.

De esta manera, en 1976 la economía registró el pleno impacto de la recesión internacional de 1974-75, cuyos efectos ya no pudieron ser amortiguados mediante el recurso al endeudamiento externo, que había alcanzado límites que ponían en cuestión la capacidad de pago del país; de ahí que tuviera que reducirse el nivel de importaciones con los resultantes efectos depresivos sobre la actividad económica interna. Por su lado, la agravación de los desequilibrios internos, expresados en el recrudescimiento del déficit fiscal, de las presiones inflacionarias y en el persistente estancamiento agrícola, contribuyó igualmente a la adopción de una política económica restrictiva destinada a contener la demanda, a intentar romper la espiral inflacionaria y a moderar el déficit presupuestal. Esta política económica fue implementada con creciente energía en junio de 1975, enero de 1976 y junio de 1976, operándose importantes reajustes económico-financieros, especialmente a mitad del año 1976. Los efectos recesivos de estas medidas se manifestaron claramente en la evolución económica, especialmente en el segundo semestre del año.

(*) Una de las dificultades que presenta el análisis de la crisis económica es la ausencia de una información estadística oportuna y confiable. Por aún muchos datos existentes son mantenidos en reserva por las instituciones oficiales (INP, BCR, MEF), que a su vez proveen de todos los detalles estadísticos a las misiones de las agencias financieras imperialistas, como el FMI. De ahí que nos veamos obligados a utilizar los datos oficiales revelados por Equis X, The Andean Report, y otras publicaciones periodísticas, que han hecho públicas las estimaciones del MEF, BCR, INP e INE.

La Evolución Sectorial

La débil expansión económica de 1976 muestra una marcada irregularidad entre los sectores productivos pero de signo inverso a la experimentada en 1975, donde las actividades ligadas al mercado interno (industria y construcción) constituyeron la base del crecimiento, mientras que las ramas volcadas a la exportación (minería y pesca) registraban importantes caídas en la producción como consecuencia de la crisis mundial en la minería y de causas naturales en la pesca, al mismo tiempo que estos factores se combinaban con un estancamiento en la agricultura. Por el contrario, en 1976 el mercado interno ingresa en una fase recesiva, por las causas ya indicadas, experimentándose una caída en la construcción y una pérdida de dinamismo en el sector industrial, a la vez que se produce cierta recuperación en las actividades de exportación y en la agricultura como consecuencia de la mejor coyuntura internacional en la minería y de favorables condiciones naturales en la pesca.

Cuadro N° 1: PBI por sectores (variación porcentual)

	1970-74	1975	1976
Agropecuaria	2.1	1.0	3.3
Pesca	-21.0	-15.2	19.9
Minería	1.4	-10.9	8.9
Industria	7.7	4.7	4.2
Construcción	12.3	16.8	-2.8
Otros	7.4	4.2	2.0
Total PBI	6.0	3.3	3.0

FUENTE: Equis X, 16 de marzo de 1977, p. 21.

Hay que subrayar, sin embargo, que la recuperación de la minería y la pesca en 1976 tiene un carácter muy relativo, ya que en el caso de la minería apenas logra reeconstrirse el nivel de producción logrado en 1972, mientras que en el de la pesca el producto sectorial de 1976 constituye menos de la mitad del alcanzado en 1970 (cf. BCR, Memoria 1974, p. 124 y "El Comercio", 1° de marzo de 1977, p. 4).

Por su lado, la agricultura logra superar temporalmente en 1976 su crónico estancamiento registrando un incremento de la producción del 3.3% por efecto de las mejores condiciones climáticas, del más oportuno y eficaz aprovisionamiento de insumos (fertilizantes, semillas, etc.) y de los reajustes de precios. Este último factor es especialmente significativo, ya que marca el final de una etapa en la que se intentó contener la inflación sobre la base de un rígido control estatal de los precios de los productos agropecuarios, que mermó profundamente la rentabilidad del sector y llegó incluso a no permitir la recuperación de los costos de producción en muchos casos, agravando el estancamiento del sector. De ahí que la nueva política de relativa liberación de precios haya contribuido a la dinamización del agro. La agricultura de exportación se vio negativamente afectada por la catastrófica baja del precio del azúcar en el mercado mundial, que no pudo ser compensada por el alza del café y las lanas, determinando que las exportaciones agrícolas experimentasen una disminución del 32% en 1976, alcanzando la cifra de 309 millones de dólares (cf. Banco Continental "Informe Trimestral", IV Trimestre de 1976, p. 6).

Este repunte temporal de la agricultura no debe ocultar que subsisten con toda su fuerza los factores estructurales responsables del estancamiento del sector como la escasez de tierras, el bajo nivel técnico y la reducida productividad de gran parte de la agricultura tradicional de la sierra, la vigencia de una inadecuada infraestructura de transporte y comercialización. A esta realidad se suma la influencia negativa originada por las dificultades que experimenta la gestión de las nuevas unidades asociativas y por la ineficacia de la intervención y control estatal, que se manifiesta en el nivel insuficiente y la entrega tardía del crédito, en las demoras en los pagos de la comercialización, etc.

La industria experimentó en 1976 una desaceleración del crecimiento, especialmente marcada en el segundo semestre, registrándose un aumento de la producción del 5.3%, que superó al incremento de 1975 sólo gracias a la recuperación de la industria de harina de pescado.

Siguiendo el patrón clásico de una recesión el estancamiento, o en muchos casos retroceso, de la producción se manifestó primero en las ramas de bienes de consumo como alimentos, muebles, bebidas e imprentas, extendiéndose progresivamente a los bienes de capital y consumo duradero, como metálicas simples y material de transporte, afectando finalmente a los productos intermedios, que sufrirán el impacto recesivo con mayor fuerza en 1977. Debe subrayarse que la dinámica de esta última rama estuvo basada en 1976 en gran medida en la recuperación de la industria de harina y aceite de pescado.

Cuadro N° 2: Variación porcentual del volumen físico de la producción industrial.

	1974	I Semes - II Semes		
		1975	tre 1976 tre 1976	
Sector Fabril	7.1	4.5	5.9	4.5
Sector MIT	6.1	5.8	6.9	3.6
Bienes de Consumo	5.2	0.7	6.8	-0.45
Bienes Intermedios	11.1	5.6	4.6	12.2
Bienes de Capital	6.2	16.0	6.4	0.10

FUENTE: MIT, Boletín Estadístico Industrial, N° 20 p. 6-7.

Por su lado, se registraron en 1976 disminuciones en la producción de alimentos básicos, que oscilan entre el 2.0% y el 7.1% en el caso de la leche pasteurizada, la harina, el aceite, los fideos y la margarina (cf. MIT, Op. cit., p. 11); se refleja así la pérdida de poder adquisitivo del salario y el recorte de los niveles de consumo de los sectores populares.

A su vez, la construcción experimentó un decremento del 2.8% como consecuencia de la retracción de la inversión pública, del gran aumento de los precios de los materiales y de la escasez de crédito, que incidieron negativamente en los niveles de la construcción privada.

Por último, las actividades de servicios registraron un crecimiento de sólo el 2.1%, reflejando el estancamiento general de la actividad productiva. (cf. El Comercio, 1° de marzo de 1977, p. 4).

La inversión y el consumo

La oferta global de bienes y servicios permaneció prácticamente estancada, aumentando en 0.3% co-

mo consecuencia del crecimiento del 3.0% del PBI y de la reducción del 13.5% de la importación de bienes y servicios.

Cuadro N° 3: PBI por tipo de gasto
(variación porcentual)

	1970-74	1975	1976
Consumo	7.1	4.8	2.6
—Público	6.7	13.5	3.4
—No público	7.2	3.4	2.5
IBI	17.6	10.0	-11.2
IBF	12.9	20.2	-7.4
—Pública	23.3	11.9	-5.7
—No pública	5.0	29.3	-9.0
Exportaciones	-5.8	-3.8	2.9
Importaciones	10.8	12.2	-13.5
PBI total	6.0	3.3	3.0

FUENTE: *Equis X*, 16 de marzo de 1977, p. 21.

El consumo privado se incrementó a un ritmo inferior al crecimiento de la población, generando una caída del consumo per cápita por primera vez en muchos años. Dos son las causas principales de este fenómeno: la disminución del salario real y el deterioro de los niveles de empleo. Las remuneraciones se redujeron significativamente por efecto del congelamiento y de los toques impuestos en un contexto de agudas presiones inflacionarias, determinando así una baja del salario real promedio en Lima del orden del 13.8% en 1976 y una disminución de los sueldos promedios de 18.2% (cf. *Desco, Informativo Político*, N° 51, dic. de 1976; p. 36). Esta situación se agrava por el hecho de que las remuneraciones ya habían caído en 1975 en 14.1% y 21.7%, respectivamente. Esta profunda caída del poder adquisitivo ha incidido en la reducción del consumo de los sectores populares y de las capas medias asalariadas.

Igualmente, ha determinado este deterioro del consumo el aumento del desempleo y subempleo originado por la multiplicación de los despidos en la minería, la pesca, la construcción y la industria, así como por la incorporación al mercado de trabajo de nuevas generaciones que no encuentran ubicación debido a la misma crisis o que se ven obligados a refugiarse en el subempleo. Es así que baja el porcentaje de los adecuadamente empleados en Lima del 74.3% de la PEA al 64.3% entre abril de 1975 y el mismo mes de 1976; se incrementa especialmente la proporción del subempleo, sobre todo en sus formas más agudas (cf. *DESCO, op. cit.*, p. 37).

Por su lado, el consumo público se expandió de manera poco significativa en 1976, después del fuerte aumento registrado en 1975, como consecuencia de la aplicación de una política económica restrictiva, que tenía como uno de sus principales objetivos la reducción del déficit fiscal vía la aplicación de una estricta política de austeridad, que se implementó con especial intensidad desde julio, como veremos más adelante.

La inversión bruta interna disminuyó en un 11.2% por efecto de la retracción del 7.4% de la inversión bruta fija y de una variación en sentido negativo de las existencias. (cf. *El Comercio*, 1° de marzo de 1977, p. 4). Esta situación es consecuencia de la profundización de la crisis e indica clara-

mente que no se está desarrollando adecuadamente la planta productiva del país, especialmente si se toma en cuenta que la tasa de inversión recién comenzaba a aumentar en 1973, luego de cinco años de estancamiento a un muy bajo nivel. (cf. para un análisis de las causas de este retraso de las inversiones Felipe Portocarrero "La Crisis y la Política Económica del Capital", *Sociedad y Política*, N° 5, Nov. de 1975; p. 21). Refleja este fenómeno el hecho de que la tasa de inversión bruta fija en el período de expansión entre 1970-74 haya alcanzado sólo el 13.51% del PBI mientras que en la fase similar del ciclo anterior, entre 1960 y 1965, dicha tasa promedió el 17.79% del producto (cf. BCR "Memoria 1974", p. 134 y BCR "Cuentas Nacionales del Perú 1950-67", p. 19). Este retraso de la inversión tendrá importantes consecuencias en la evolución a mediano plazo de la economía peruana, que se examinarán más adelante.

La inversión pública en 1976 se redujo en un 5.7% como efecto de la política de austeridad fiscal que determinó el recorte de las inversiones no prioritarias y la postergación o realización más lenta de otros proyectos. A su vez, la inversión privada disminuyó en un 9.0% debido a la caída de la rentabilidad, a las dificultades para obtener crédito e importar maquinaria y a la terminación de grandes proyectos de inversión extranjera en el cobre (Cuzajón) y la exploración petrolera de la Amazonía. Asimismo, desalentó las inversiones la profundización de la crisis con el consiguiente estancamiento y disminución de la producción que determinó la ampliación de los márgenes de capacidad instalada ociosa.

El sector externo

La balanza de pagos terminó en 1976 con un déficit record de 821 millones de dólares, generando una aguda falta de divisas para atender a las importaciones y colocando al país al borde de la cesación de pagos, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 4.

Cuadro N° 4: Resumen de la Balanza de Pagos

(en millones de dólares)

	1974	1975	1976
Exportación FOB	1503.3	1290.9	1393.3
Importaciones FOB	1908.9	2390.2	2080.1
1. Balanza comercial	-405.6	-1099.3	-686.8
2. Balanza de servicios y transferencias	-401.6	-439.1	-433.9
3. Balanza en cuenta corriente (1+2)	-807.2	-1538.4	-1120.7
4. Capital a largo plazo	804.9	1135.1	807.1
5. Balanza neta básica (3+4)	87.7	-403.3	-513.6
6. DEG	—	—	—
7. Capital a corto plazo y errores, y omisiones	194.2	-173.4	-307.0
8. Balanza de pagos (5+6+7)	281.9	-578.7	-821.0

FUENTE: *Equis X*, 16 de marzo de 1977, p. 23.

El déficit de la balanza comercial pudo reducirse en un 37.52% entre 1975 y 1976, aún cuando todavía representaba en términos absolutos un volumen considerable. Este resultado fue logrado gracias a la progresión de las exportaciones en un 7.9% y a la contracción de las importaciones en un 13.0%. El repunte de las exportaciones, que aún no alcanzan su nivel de 1974, fue debido fundamentalmente a la mejoría de la coyuntura internacional, que permitió colocar en el mercado internacional un mayor volumen de materias primas a mejores precios, especialmente en el caso de los minerales, primer rubro de exportación del país. El alza de las cotizaciones fue más pronunciada en la primera mitad del año, alcanzando a fines de junio el índice de precios de exportación el valor de 117 (1975=100) para descender a 108 a fines de año (cf. Banco Continental, *Op. cit.*, p. 3), como consecuencia de la pausa registrada en el reestablecimiento económico de los centros capitalistas más importantes. La baja de las importaciones se explica por la pérdida de dinamismo de la expansión interna, por la finalización de grandes proyectos de inversión en petróleo y minerales y por la utilización de los cuantiosos stocks acumulados en 1974-75, que permitieron realizar importantes beneficios a las empresas dado que la devaluación monetaria alcanzó el 54.16% en 1976 (cf. Banco Continental, *op. cit.*, p. 4).

A pesar de esta relativa mejoría de la balanza comercial el déficit global de las transacciones externas se elevó en 1976 debido a la necesidad de pagar los créditos a corto plazo, contraídos en 1974-75 para financiar las importaciones, y a los menores ingresos de capital a largo plazo. Este último factor está indicando claramente que el país se está aproximando a los límites de su capacidad de endeudamiento externo, ya que la deuda contraída se haya mal estructurada y representa tal volumen de obligaciones para el resto del decenio que compromete seriamente la capacidad de pago del Perú. De ahí la reticencia del capital financiero internacional a seguir abriendo las compuertas del crédito y su insistencia en la necesidad de adoptar drásticas medidas de saneamiento. Por estas mismas razones los nuevos préstamos contraídos y las operaciones de refinanciación se han concluido en términos aún más desfavorables al país, comportando incluso en algunos casos la prerrogativa que la banca privada internacional pase revista a la política económica interna.

El profundo desequilibrio en el sector externo originó una fuerte pérdida de reservas, descendiendo su nivel de 269 millones de dólares a fines de 1975 a un nivel negativo de - 645 millones en noviembre de 1976 (Banco Continental, *op. cit.*, p. 3).

La inflación y la política crediticia

Como expresión de la profundización de la crisis en 1976 se acentuaron notablemente las presiones inflacionarias. Los precios al consumidor en Lima se elevaron en un 44.68%, estableciendo un récord en la historia del país en el presente siglo; el alza fue especialmente marcada en el rubro de alimentos y bebidas, afectando en consecuencia con mayor impacto a los sectores populares (cf. *La Prensa*, 19 de enero de 1977, p. 7). Debe subrayarse que el

incremento de los precios se aceleró en el segundo semestre de 1976, alcanzando una tasa del 28.07%, debido al impacto de los amplios reajustes económico-financieros adoptados en junio. Esta situación condicionó que el deflactor implícito del PNB se elevara en un 34.9% en 1976, superando largamente el incremento del 20.1% registrado en 1975 (cf. *El Comercio*, 1° de marzo de 1977, p. 4).

La aceleración de la inflación refleja la importancia del déficit fiscal que a pesar de las medidas de austeridad implementadas alcanzó en 1976, según estimaciones preliminares, al 14.5% de los gastos; de esta manera, si bien se registró una mejoría en este aspecto frente a 1975, año en que dicha tasa llegó al 20.4% de los gastos (cf. Banco Continental, Informe Trimestral, Dic. de 1976, p. 1), las necesidades de financiamiento del Estado fueron considerables y se vieron agravadas por los cuantiosos déficits de las empresas públicas. Es claro el impacto inflacionario que ejerció la necesidad de financiar esta gran brecha.

Asimismo, contribuyó a incrementar el alza de los precios el impacto de la inflación importada, que repercute en los costos de los insumos y equipos internados en el país. Igualmente, la adopción de grandes reajustes de precios en enero y junio, así como la implementación del sistema de las minidevaluaciones, agudizaron la inflación. Se buscaba así eliminar los desequilibrios acumulados en los últimos años y encontrar una nueva estructura de precios relativos más acorde con las tendencias del mercado.

La política monetaria y crediticia, por su lado, se caracterizó por una tónica restrictiva en 1976; fue utilizada como un instrumento de control de la demanda frente al sector privado y como elemento de moderación de las presiones inflacionarias. De esta forma, la oferta monetaria durante los once primeros meses del año se contrajo en términos reales en un 18%, generando presiones sobre la liquidez del sector privado. (cf. Banco Continental, Informe Trimestral, Dic. de 1976, p. 2).

En términos reales el crédito interno hasta noviembre de 1976 se expandió en un 11.6%, pero la mayor parte de este crecimiento fue absorbido por operaciones de cambio (cf. *Ibid.*, p. 2). Más aún, la necesidad de financiar la gran brecha fiscal del sector público determinó que el Estado monopolice en la práctica la captación de las nuevas facilidades crediticias, condicionando que el crédito al sector privado se contrajera en un 8.4% en el período de referencia. Esta situación creó dificultades de liquidez a muchas empresas, especialmente a las medianas y pequeñas.

3. LA REORIENTACION DE LA POLITICA ECONOMICA

En 1976 se consumó la redefinición de la política económica iniciada el año anterior, adoptándose una orientación restrictiva que contrasta con la tónica expansionista mantenida entre 1970 y 1974. Al mismo tiempo, y en similar contraposición, la política económica asumió rasgos más "liberales", revirtiéndose parcialmente la tendencia anterior a una mayor regulación estatal de la economía. Estos

cambios obedecen directamente a la necesidad de enfrentar la crisis, que siempre dentro del capitalismo hace redescubrir las "bondades" de la ortodoxia.

La política económica implementada traduce con bastante fidelidad el carácter de clase del régimen. Se trata de restablecer el equilibrio económico y de incrementar las ganancias de las empresas estatales y privadas a costas de la disminución del salario, del consumo y del empleo de los sectores populares y de las capas medias asalariadas, como se demostrará en detalle más adelante.

Tres son las principales características de la reorientación de la política económica. En primer lugar, la tónica restrictiva imperante destinada a enfrentar la crisis y romper la espiral inflacionaria a través de una reducción del consumo y las importaciones lograda vía los expedientes clásicos de la disminución del salario y del empleo, del recorte del déficit fiscal, de la restricción del crédito y de una serie de devaluaciones en cascada. En segunda instancia, se adopta una tónica más "liberal" para restablecer el equilibrio y promover la confianza de los inversionistas, recortándose la intervención estatal en la economía, lo que se manifiesta en el progresivo relajamiento del control de precios, en el paulatino abandono del intento de planificar estrechamente el desarrollo de la economía, y en las aún mejores condiciones ofrecidas a la inversión extranjera, cuyo régimen ha sido liberalizado. En tercer lugar, forman parte de esta política económica la instauración de estrictos controles globales sobre los salarios y otras reivindicaciones del movimiento sindical, construyendo severamente la libertad de negociación; se implementa así un programa de reducción salarial coordinado centralmente por el Estado. Igualmente, dentro de esta misma perspectiva se ha acentuado los controles sobre el gasto fiscal, tanto de consumo como de inversión, cortándose así la rápida y muchas veces inorgánica ampliación del aparato estatal.

En síntesis, la reorientación de la política económica se ha dirigido a restaurar plenamente las funciones del mercado como regulador de la economía, restringiéndose los controles en lo fundamental a los salarios. De esta forma se han abandonado los ensayos destinados a lograr una posición hegemónica para el capital estatal, con vocación de articular en su propio terreno al capital monopólico internacional y, en menor medida, interno; este ensayo conllevaba la multiplicación y diversificación del control e intervención estatal en la economía. En este sentido se ha producido una privatización a un doble nivel. Por un lado, y de hecho con la menor importancia, han vuelto a manos privadas algunas actividades productivas previamente incorporadas al sector estatal, como la extracción de anchoveta. Por el otro, el manejo mismo de las empresas públicas se opera en términos cada vez más privatistas, bajo el control cada vez más directo y orgánico de la burguesía, que las utiliza crecientemente como bases para la acumulación del capital monopólico vía la creación de economías externas, la provisión de importantes mercados públicos, la instalación de una adecuada infraestructura, etc.

No se perfila, en consecuencia, un desmontaje total del área estatal de la economía, que se ha

convertido actualmente en una pieza indispensable para la buena marcha del aparato productivo. Se trata, más bien, de hacerla más funcional y eficiente en relación a la expansión del capital monopólico internacional e interno.

Las principales medidas de política económica en 1976

En enero de 1976 se adoptó un paquete de medidas económicas de carácter restrictivo, que desarrollaba y profundizaba la orientación planteada en los reajustes de junio de 1975. (cf. para un análisis de estas medidas Felipe Portocarrero "El Plan Barú", *Sociedad y Política*, N° 5, marzo de 1976, p. 24-25).

A lo largo de la primera mitad de 1976 se irá clarificando la insuficiencia de las medidas adoptadas y los errores en las previsiones oficiales. En los hechos la recuperación internacional era menos vigorosa y más lenta de lo anticipado por el régimen, que encontraba cada vez mayores dificultades para captar el monto necesario de préstamos externos. A su vez, se desataba una creciente presión por parte de la burguesía imperialista y nativa para promover la aplicación de medidas aún más energéticas de reducción del empleo y consumo popular y de limitación del gasto público.

De esta manera, a mitad de 1976 la situación económica alcanzó un punto crítico: se enfrentaba una aguda escasez de divisas, se endurecían y condicionaban cada vez más los préstamos externos, y se producía una notable agravación del déficit fiscal. Frente a esta situación el gobierno decreta a fines de junio de 1976 una significativa devaluación y un amplio conjunto de medidas económicas.

Por esta vía el régimen persigue mejorar la rentabilidad del capital privado y estatal, que había sido erosionada por la crisis. Se otorga así un importante reajuste de precios a las empresas, al mismo tiempo que se implanta un aún más rígido control estatal de los salarios y se favorece la reconstitución del capital de trabajo de los centros productivos. Las autoridades persiguen reducir la brecha externa a través de la devaluación y el control de las importaciones, estimulando las exportaciones y restableciendo la rentabilidad de las empresas que las generan. La estrategia elegida incluye asimismo la reducción del déficit fiscal como consecuencia del aumento de los impuestos, la reducción de las inversiones estatales y el congelamiento del gasto corriente. Esta política fiscal, unida a la práctica de una severa restricción monetaria y crediticia, se dirigen a tratar de moderar la espiral inflacionaria.

Las principales medidas económicas adoptadas por el régimen son: 1) Una drástica devaluación del 44.4%, que eleva la cotización del dólar de 45 a 65 soles, restableciendo no sólo el equilibrio entre los precios internos y externos sino también beneficiando a los exportadores con un dólar ligeramente sobrevalorado (cf. *La Prensa*, 1° de julio de 1976, p. 2). En significativa ruptura con la tradicional política cambiaria del país desde setiembre de 1975 se instauró el sistema de las minideva-

luaciones para preservar el equilibrio logrado. De esta manera la depreciación acumulativa del sol en 1976 alcanzó al 54% (cf. Banco Continental, *Op. cit.*, p. 4).

2) Se elevaron los precios de los artículos básicos entre el 11% y el 57% (cf. *La Prensa*, 2 de julio de 1976, p. 1), concediéndose un periodo de tres meses para aumentar los precios de los bienes y servicios sujetos a control. Dentro de la misma óptica se incrementó el precio de la gasolina en un 117.4%, pasando de 23 a 50 soles el galón. De esta forma, el precio de este combustible ha subido en un año en 455.5%. Por su lado, se mantuvieron 2,000 millones de soles de subsidios a los alimentos para intentar amortiguar estas alzas, suma que resulta claramente insuficiente.

3) Se estableció también un fuerte aumento de los impuestos a la producción y al consumo, elevándose la tasa general del 17% al 20% y del 26% al 40%, en el caso de los artículos suntuarios. El incremento del impuesto a la gasolina se ha destinado a financiar los planes de expansión de PETROPERU y a sanear el déficit del resto de empresas estatales. Igualmente, se ha elevado los impuestos a la importación y se ha creado un tributo del 15% a la exportación tradicional, del que han sido liberadas la pequeña y mediana minería. El conjunto de estas medidas fiscales permiten incrementar la recaudación en 22,500 millones de soles.

4) Se ha operado un severo recorte del gasto público vía la congelación de sueldos y salarios en el sector público, la prohibición de contratar nuevo personal y la reducción de los gastos en bienes y servicios. Igualmente, se han reducido las inversiones estatales en 4,500 millones de soles y las de las empresas públicas en 9,666 millones. Estas medidas de austeridad implican una reducción del gasto público de 14,800 millones, que sumados a los mayores ingresos tributarios permiten reducir el déficit fiscal en 37,300 millones de soles.

5) Se ha establecido un alza de las tasas de interés, aumentando el máximo legal del 14% al 19%, así como se ha limitado la distribución de las utilidades al 10% del capital pagado para propender a la reconstitución del capital de trabajo de las empresas y estimular las inversiones.

6) Por último, se otorgó un alza de remuneraciones del 14% al 10%, desde un mínimo de 720 soles mensuales para los menores salarios hasta un máximo de 1,500. De igual manera, se ha incrementado el salario mínimo en Lima a 4,500 soles mensuales. Debe destacarse que no sólo se han mantenido los toques salariales establecidos en junio de 1975, cuyo poder adquisitivo disminuye cada vez más, sino que se prolonga la vigencia de los pliegos de reclamos de 1976 por 6 meses, lo que equivale a un congelamiento total por ese lapso (D.L. 21535). Los trabajadores que cuentan con reajustes automáticos de salarios se incluyen dentro de los toques y experimentarán un bloqueo total de salarios en el primer semestre de 1977. Asimismo, debido a la instauración del Estado de Emergencia se ha prohibido la realización de paros y huelgas.

Los efectos de las medidas económicas

Es claro que la estrategia económica implementada descarga las consecuencias de la crisis sobre los sectores populares y las capas medias asalariadas, generando una fuerte reducción de sus niveles de salarios y empleo. De ahí que la imposición de este paquete de medidas no haya podido sustentarse en el logro de un mínimo consenso social, determinando que el régimen proclame el Estado de Emergencia, la suspensión de garantías y el toque de queda, recortando así drásticamente los derechos democráticos y laborales de los trabajadores.

La actual política económica tiene consecuencias claramente recesivas y ha contribuido a frenar el crecimiento en la segunda mitad de 1976 y en 1977. El objetivo de esta política es lograr una reducción del consumo y las importaciones para sentar las bases de una posterior recuperación, sustentada en la mejora de la rentabilidad del capital privado y estatal, así como en la limitación del déficit fiscal y del desequilibrio de la balanza de pagos.

Como se ha visto, la contracción económica afecta con especial intensidad a la industria y a la construcción. El colapso del mercado interno no podrá ser enteramente compensado con el aumento de las exportaciones de manufacturas, que sólo proporcionará un alivio relativo para las grandes empresas ya sólidamente instaladas en esta actividad. Como consecuencia del deterioro de la coyuntura se ven especialmente afectados los medianos y pequeños centros productivos, cuyas bases económicas y financieras son menos solventes. La reducción de la producción industrial repercutirá en una ola de despidos, acrecentándose al mismo tiempo los esfuerzos de los empresarios para incrementar la productividad y estimular la racionalización de sus actividades.

La construcción, como se ha señalado, ha entrado en una fase depresiva que repercute igualmente en la declinación del empleo en el sector y pondrá en dificultades a muchas empresas del ramo, especialmente a las de menor envergadura.

La depresión del mercado y la producción interna intenta ser amortiguada por el régimen gracias al estímulo del sector exportador y de la agricultura, cuyas perspectivas han sido apuntaladas por las devaluaciones, el otorgamiento de mayores alicientes fiscales y crediticios y la mejora de la coyuntura internacional.

EL PANORAMA ECONOMICO EN 1977

A comienzos de 1977 era claro que la reorientación de la política económica comenzaba a arrojar sus primeros resultados reflejados en la atenuación del déficit fiscal y del desequilibrio de la balanza de pagos en la segunda mitad de 1976, en el ordenado desmantaje de los controles de precios y en el nuevo énfasis en el rol regulador del mercado, así como, sobretodo, en la drástica contención de las presiones reivindicativas de los trabajadores, que tornó posible la reducción del salario y del empleo, mejorándose de esta manera las perspectivas de la rentabilidad.

Al mismo tiempo, resaltaban importantes problemas. Se revelaban las dificultades para romper la espiral inflacionaria a pesar de las optimistas declaraciones oficiales. Igualmente, era perceptible la ausencia de una clara estrategia de desarrollo a mediano plazo, una vez abandonados los planes de 1971-75 y de 1975-78, cuyas previsiones de base fueron completamente desbaratadas por la crisis. Asimismo, la falta de una alternativa política claramente estructurada y dotada de un suficiente grado de consenso en el seno de la burguesía y la tecnocracia tornaba problemático el mantenimiento de la política de austeridad y, sobretudo, dificultaban la repartición de sus costos entre las diferentes fracciones del capital privado y estatal, tal como se demostraría en las discusiones sobre el presupuesto de 1977 y acerca de las recomendaciones del FMI.

De ahí que la política económica en 1977 conserve, en buena medida, la orientación restrictiva practicada el año anterior, intentando asegurar el pleno restablecimiento del equilibrio aun a costa de un bloqueo de la expansión. Es claro también que como resultado de las dificultades y desacuerdos mencionados el régimen ensaya igualmente evitar una profundización demasiado violenta de la recesión, que podría poner en peligro el esfuerzo de estabilización, avivar los conflictos fraccionales dentro de la burguesía y romper la barreras de contención de las reivindicaciones populares.

Las previsiones oficiales estiman un crecimiento del PBI del 3.7% en 1977, profundizando el patrón desigual ya registrado el año anterior. De esta manera, mientras que el sector exportador (la minería principalmente) experimentará una importante expansión, el mercado interno permanecerá deprimido con la consiguiente reducción de la inversión y del consumo per cápita por segundo año consecutivo, tal como se puede observar en el cuadro N° 5.

Cuadro N° 5: PBI por sectores
(variación porcentual)

	1976	1977 (proyectado)
Agropecuaria	3.3	2.8
Pesca	19.9	12.0
Minería	8.9	38.0
Industria	4.2	3.0
Construcción	-2.8	-6.0
Otros	2.0	0.8
Total PBI	3.0	3.7

FUENTE: *Equis X*, 18 de marzo de 1977, p. 22.

El crecimiento del sector exportador se sustentará en la entrada en producción de dos nuevas minas (Cujone y Cerro Verde), que permitirá duplicar la producción de cobre (cf. Sudameris "Evolution Récente du Marché Mondial du Cuivre", Dic. de 1976, p. 15), y en el aumento de la producción del petróleo amazónico. Asimismo, la elevación de la rentabilidad del sector exportador ocasionada por la devaluación estimulará las exportaciones, incluido un crecimiento de las industriales, resultado que se reforzará por la ayuda crediticia y tributaria a la pequeña y mediana minería.

Por otro lado, el régimen prevee una profundización de la recesión interna en 1977, que conllevará

una fuerte caída de la construcción y un estancamiento de la industria, reflejando así el marasmo de un mercado interno, que enfrenta un crecimiento del consumo de sólo el 1.1%, una baja de la inversión del 8.9% y un descenso de las importaciones del 5.7% (cf. *Equis X*, *ibid.*, p. 23).

En el sector externo se anticipa una sustantiva reducción del déficit de la balanza comercial a 97 millones de dólares por efecto del aumento de las exportaciones de 1,393 millones a 1,923 millones y de la reducción de las importaciones, esperándose lograr una posición superavitaria desde 1978. (cf. *Equis X*, *ibid.*, p. 23). Igualmente, las autoridades esperan concluir el año con un superávit en la balanza de pagos gracias al ingreso de préstamos a largo plazo por valor de 702 millones de dólares que permitan compensar el déficit en servicios y transferencias.

A nivel de la política económica se planea continuar la orientación restrictiva, sobre todo controlando la liquidez y el crédito al sector privado como medios de combatir las presiones inflacionarias. A su vez, en el campo fiscal se proyecta mantener el presupuesto en déficit para amortiguar así la intensidad de la recesión y conciliar las diferentes presiones de gasto de los ministerios y las empresas públicas, surgidas en gran medida debido a la ausencia de una alternativa política coherente, como se ha indicado.

En el presupuesto aprobado para 1977 se priorizan los gastos de capital, que aumentan su participación en el total del 28.4% en 1975 al 32.8% en 1977 (cf. *El Comercio*, 30 de Dic. de 1976, p. 4), reflejando en cierta medida la necesidad de continuar los grandes proyectos de inversión en ejecución por parte del Gobierno Central y de las empresas públicas. Como contrapartida se promueve una estricta racionalización del gasto corriente sobre la base de la reducción de las remuneraciones reales de los empleados públicos. Dado que al mismo tiempo no se prevee en el presupuesto aprobado un alza de impuestos la brecha fiscal resultante alcanza los 62 mil millones de soles, significativamente mayor que la registrada en la segunda mitad de 1976, que se elevó a sólo 11 mil millones, (cf. *Equis X*, 28 de abril de 1977, p. 24). Es claro que la financiación de un déficit de esta magnitud en una economía en recesión presenta evidentes consecuencias inflacionarias y traba el logro de las metas de estabilización propiciadas por el FMI y las agencias financieras internacionales.

Igualmente, con la finalidad de amortiguar la recesión se otorgó a fines de enero de 1977 un aumento general de 810 soles mensuales, que se descuenta de los topes establecidos y que busca contener, en alguna medida, la caída de los salarios reales.

El logro de las metas oficiales de la política económica para 1977 enfrenta diversos problemas. La importante sequía que ha afectado a gran parte del país hace poco probable que se alcance el crecimiento de la agricultura del 2.8% anticipado; esta situación se complica por la crítica coyuntura de los complejos agro-industriales, derivada en gran medida de la ruinosa baja del precio internacional del azúcar, que ha motivado la intervención estatal de estas empresas. El estancamiento, o aún probable descenso, de la producción agraria creará

dificultades de aprovisionamiento y alimentará las presiones inflacionarias. Igualmente, la agravación de la recesión interna por efecto de la caída de la demanda y de la restricción crediticia y monetaria impactarán con mayor fuerza de la prevista por el régimen a la industria y la construcción. A su vez, la liberalización del control de precios y la sucesión de las minidevaluaciones estimula el alza de precios y torna utópica la meta oficial de limitar la inflación a un 15% en 1977. Por último, el éxito del plan del régimen depende en gran medida de una evolución favorable de las cotizaciones de las materias primas en el mercado mundial, que permita incrementar los ingresos de las exportaciones y desahogue la tensa situación de la balanza de pagos.

En este sentido, todos los factores de desequilibrio económico señalados han determinado una profundización de la dependencia del régimen frente al capital internacional, cuyo apoyo es imprescindible para colmar el déficit externo y la brecha fiscal. Es así que el gobierno ha programado para 1977 captar 964 millones de dólares de nuevos préstamos, de los cuales 250 millones están destinados al apoyo de la balanza de pagos; de este modo la deuda pública externa pasará de 2,182 millones de dólares a fines de 1974 a 4,579 millones a fines de 1977 (cf. Desco, *Informativo Político*, N° 51, p. 34), gravando pesadamente las futuras exportaciones del país y colocándolo en sus límites de endeudamiento.

El capital financiero internacional a su vez exige condiciones cada vez más onerosas para desembolsar sus préstamos, efectuándolos en plazos cortos y con altas tasas de interés. Presiona además por una mayor austeridad y reducción del consumo, acrecentando aún más su ingerencia en la política económica interna (*).

Estas perspectivas determinan que probablemente la recesión interna en 1977 alcance una mayor profundidad que la anticipada por el gobierno, agravando la caída de los salarios reales y la disminución del empleo, que conllevan la necesidad de mantener el rígido control estatal de las reivindicaciones de los sectores populares y las capas medias asalariadas. Las empresas, por su lado, intensificarán sus esfuerzos para imponer una aún más estricta disciplina laboral y debilitar los conquistas sindicales, incrementando la productividad y reduciendo el empleo con vistas a reconstituir los márgenes de ganancia. La recesión interna, como se ha visto, tornará más precaria la situación de las medianas y pequeñas empresas, incrementando las quiebras y estimulando la concentración.

(*) Como lo demuestran las proposiciones del FMI realizadas al momento de concluir la redacción de este artículo en abril de 1977. El FMI exige una drástica reducción del déficit del sector público, una disminución y liberalización de las importaciones, vía una fuerte devaluación y un radical freno al crecimiento de la deuda externa, como medidas de corto plazo. Asimismo, y con igual importancia, plantea al FMI el logro de más amplia y favorables acuerdos para entregar las riquezas naturales del país —especialmente mineras y petroleras— a la explotación de las grandes empresas multinacionales. Es claro que la adopción de este paquete de medidas generará una grave acentuación de la recesión interna, afectando fundamentalmente a los sectores populares y capas medias asalariadas, así como a muchas medianas y pequeñas empresas.

Más allá de este sombrío panorama coyuntural se perfila una posible recuperación a partir de 1978, cuyas bases se encuentran en el mejoramiento de la rentabilidad del capital y en el restablecimiento del equilibrio económico generados por acción de la misma crisis.

Varias son las fuerzas que impulsarán esta recuperación. En el curso de 1977 y 1978 se materializará una importante ampliación de la base exportadora del país, que como se ha señalado permitirá elevar sustantivamente los ingresos de divisas y la producción de excedentes. Igualmente, en ese lapso entrarán en producción un conjunto de inversiones estatales como el oleoducto, algunas irrigaciones de la costa, y la ampliación de la industria básica (en papel, refinación de petróleo, cemento, acero, etc.) que permitirán incrementar la producción y reducir las importaciones, liberando divisas para alimentar la expansión y capitalización de las empresas, cuya rentabilidad se habrá elevado por la racionalización de la producción, el aumento de la productividad y la compresión salarial.

Debe subrayarse, sin embargo, que esta posible recuperación está sujeta a dos importantes condicionantes. Por un lado, a la continuidad de la mejoría de la coyuntura internacional, ya que un estancamiento, o peor aún una nueva recesión, limitaría notablemente las posibilidades de desarrollo de la economía nacional. Por otro lado, la recuperación depende igualmente de la evolución interna de la lucha de clases, que determina la posibilidad de mantener altas tasas de plusvalía a mediano plazo, consolidando la redistribución del ingreso lograda durante la crisis a favor de las ganancias vía la reducción del salario.

5. LAS PERSPECTIVAS A MEDIANO PLAZO

Enfocando la problemática de la economía peruana en una visión más amplia que la coyuntural se ha señalado la posibilidad de una recuperación a partir de 1978. De ahí que surja la comparación entre la actual crisis y la de 1967-69, que pudo ceder paso a un rápido y relativamente equilibrado recobramiento desde 1970.

¿Estaremos hoy en vísperas de una evolución similar? De acuerdo a la argumentación desarrollada en este artículo dicho resultado es poco probable, dado que la actual crisis es más profunda por la señalada convergencia de la recesión internacional con la agravación de las contradicciones internas del capitalismo en el país.

En efecto, el crecimiento de la economía peruana a mediano plazo se verá limitado por varios factores. En primer lugar, y a diferencia de 1967-69, la economía internacional capitalista ha ingresado en los últimos años en un período de crecimiento más lento e irregular, caracterizado por la multiplicación y agravación de las recesiones, acortándose al mismo tiempo las coyunturas de auge, que presentan a su vez mayores desequilibrios y contradicciones (inflación, caos monetario, agudización de la competencia internacional y de las crisis de balanza de pagos, etc.). Esta situación ejercerá una

profunda influencia sobre la economía nacional, ya que se traducirá en un crecimiento más lento del comercio internacional, en la agudización de las fluctuaciones de los precios de las materias primas, en las mayores dificultades de lograr un flujo sostenido y en aumento de inversión y financiamiento externo, etc. Más aún, la probable recesión en una nueva recesión de la economía internacional antes de 1980 agrava esta perspectiva, ensombreciendo el panorama económico nacional.

En segunda instancia, en el último ciclo de expansión iniciado en 1970 la economía nacional ha registrado un bajo nivel de inversiones, que recién comenzó a ser superado en 1973 para concluir abruptamente en 1976, como consecuencia de la actual crisis. De ahí que se haya restringido la ampliación del aparato productivo, limitándose las posibilidades de una futura expansión, ya que no se podrá contar como en 1970-74 con la existencia de amplias capacidades ociosas heredadas del ciclo anterior. Esta situación determina que una futura revitalización de la demanda interna vaya a generar rápidamente cuellos de botella debido a la insuficiencia de las capacidades de producción, estimulando la especulación y alimentando las presiones inflacionarias.

En tercer lugar, el vertiginoso aumento de la deuda externa en los últimos años, así como las desfavorables condiciones de su contratación y estructuración, colocan al país en la obligación de atender a una pesada carga: el pago de la amortización y los intereses concentrados en los próximos años. De esta forma, los desembolsos exigidos por el servicio de la deuda pública externa pasarán de 754 millones de dólares en 1977 a 1,594 millones en 1980, representando el 39% y el 54% de las exportaciones del año, respectivamente. (cf. *Equis* X, 29 de abril de 1977, p. 25). La necesidad de sufragar estas cuantiosas remesas al capital internacional limitará muy drásticamente las posibilidades de un futuro crecimiento en la economía nacional; aún una importante refinanciación de la deuda, con todas las concesiones y condicionamientos que implica, no resolvería enteramente el problema, que continuaría pesando sobre la evolución económica a mediano plazo del país.

Por último, en el período reciente se han agudizado los desequilibrios intersectoriales, especialmente los relacionados con el estancamiento de la agricultura y con la creciente dependencia de la economía frente a la importación de insumos. La corrección, o aún atenuación, de estos desequilibrios sólo es posible dentro de una acción encaminada al largo, o por lo menos mediano plazo, limitando en consecuencia las perspectivas de la expansión económica nacional.

A estos factores se suma una transformación de gran importancia ocurrida en los últimos años: la extensión y fortalecimiento del movimiento sindical y popular, que tomará más problemática la

contención duradera de las presiones salariales y redistributivas, erosionando así las bases de un mantenimiento estable de altas tasas de plusvalía capaces de apuntalar la rentabilidad del capital.

De ahí que actualmente confrontemos una perspectiva económica a mediano plazo que difiere significativamente del optimista panorama anticipado por el régimen en 1974-75, momento en el cual se preveía que la maduración de los grandes proyectos de inversión realizados en el marco de la asociación del capital estatal con el capital imperialista abriría las puertas a una fase de acumulación acelerada y equilibrada.

La más ajustada evaluación de la economía internacional y del potencial de recursos naturales del país (especialmente en el campo del petróleo), así como el estallido de la actual crisis, han echado por tierra estas previsiones. De esta manera, el régimen se encuentra hoy carente de un programa económico a mediano plazo, después del fracaso y abandono de los planes de 1971-75 y 1975-78.

Sin embargo, han comenzado a emerger algunas orientaciones, aún no muy definidas, de las características que esta programación económica oficial a mediano plazo asumiría. Es así que se subraya la necesidad de implementar una política agraria capaz de romper el estancamiento del sector y promover una elevación de su nivel técnico y productivo, con vistas a reducir este desequilibrio intersectorial y contribuir a la expansión económica interna. Igualmente, se está enfatizando actualmente la necesidad de plantear una sustitución "racional" de importaciones, dentro de los marcos y condicionamientos impuestos por la necesidad de alcanzar una mayor integración subregional. A su vez, todos estos esfuerzos se ubican en la perspectiva de acrecentar el papel regulador del mercado, buscándose una más amplia y profunda integración en la división internacional del trabajo, lo que supone una aún mayor apertura frente a la acción del capital internacional.

Es claro que las líneas de esta programación económica a mediano plazo aun no se hayan claramente dibujadas, encontrándose este punto en un lugar central en los actuales debates de la burguesía sobre las perspectivas globales a mediano plazo de la sociedad peruana.

Pero es también evidente que la economía nacional confronta un panorama marcado por un acrecentamiento de las dificultades y contradicciones, que difiere profundamente del período de crecimiento sostenido y relativamente equilibrado experimentado desde 1950. Sin duda, esta situación recortará el margen de maniobra de la burguesía y agudizará los enfrentamientos sociales, ampliando en consecuencia las bases de una posible insurgencia del movimiento obrero y popular, empujando en la transformación socialista del Perú.

ABRIL DE 1977.

Universidad y Sociedad: se Agudizan las Contradicciones

CESAR GERMANA

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD: SE AGUDIZAN LAS CONTRADICCIONES

En los últimos meses, se ha reiniciado el debate sobre la crisis de la Universidad y sobre las alternativas para solucionarla. Este ha abarcado los diversos problemas que configuran la actual situación universitaria y que van desde su organización académica y administrativa, hasta sus condiciones y posibilidades materiales. Todo ello se ha venido desarrollando profusamente en periódicos, revistas, mesas redondas, seminarios, y ha revelado con claridad las posiciones del gobierno y de la burguesía, así como las del movimiento universitario (profesores, estudiantes y trabajadores no docentes).

Del lado del gobierno y de la burguesía, este interés expresa la preocupación por encontrar una salida a la situación políticamente explosiva que se va agudizando en las universidades, y, también, constituye el reconocimiento de su fracaso para ofrecer un programa orgánico y eficaz para la transformación de las instituciones de educación superior. Su actual inquietud gira alrededor del problema de cómo mantener a las universidades dentro del "orden". Lo cual los ha llevado a presentar un conjunto de medidas autoritarias y burocráticas (sistematizadas en el "Plan de Emergencia" elaborado por el CONUP) y a la utilización de la abierta represión militar-policial (como en los casos de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Universidad de la Cantuta).

Del lado del movimiento universitario, no se ha logrado articular un programa alternativo a la política del gobierno. Sus propuestas han sido fundamentalmente reivindicativas, no afrontando el problema de la transformación global de la Universidad. Consecuencia de ello ha sido que el acercamiento a la clase obrera y al movimiento popular tenga un carácter puramente ideológico, y no se fundamente en la existencia de precisos nexos materiales.

El debate sobre la situación universitaria también ha servido para poner en evidencia que un buen número de análisis y alternativas se plantean sin salir de la perspectiva del sistema actual. Es decir, se examinan detalladamente los problemas de la universidad, dentro del contexto de la sociedad capitalista, considerada como un hecho, como

un dato de la realidad que no puede ser transformada. Por ello toda "solución" que se plantee desde esta perspectiva estará destinada al fracaso, como lo ha demostrado la política universitaria del gobierno militar, por no ir a la raíz del problema.

Por el contrario, si se quiere entender el real significado de esta crisis es necesario situarse en una perspectiva diferente: la de partir del carácter histórico y transitorio de la sociedad peruana actual. Sólo así podremos entender el sentido radical de la crisis de la Universidad. En esta perspectiva no se trata de desajustes más o menos coyunturales de la universidad, sino de un problema más amplio: la crisis de la sociedad capitalista en su conjunto. De donde, la crisis de la Universidad no es más que una de sus expresiones. Así, si se quiere encontrar una explicación válida de ésta, se tienen que determinar el sentido de la crisis del capitalismo y de las formas en que se expresa en la Universidad.

Sólo de esta manera será posible plantear una alternativa radical de transformación de la Universidad, que al cuestionar el sistema actual contribuya a su superación. Así, también, se encontrará un objetivo específico a las luchas del movimiento universitario en el amplio frente de las fuerzas sociales que luchan contra el capitalismo.

El objetivo específico del movimiento universitario en la lucha contra el capitalismo, se centra en el rechazo de la Universidad como garante de la reproducción de los roles sociales que exige la división capitalista del trabajo. El que esto no es una perspectiva utópica buscaremos demostrarlo en el presente artículo, pues es posible precisar las bases materiales que la fundamentan.

I. LA CRISIS DE LA UNIVERSIDAD

La crisis de la Universidad no puede ser explicada —tal como lo sostienen los sectores reaccionarios del país— ni por la politización de los estudiantes, ni por el desorden académico y administrativo por el que atraviesa. Más bien, esos fenómenos expresan procesos más profundos que es necesario develar si se quiere entender el sentido radical de la crisis del sistema universitario del país. Esta perspectiva exige examinar el papel que cumple la Universidad en la sociedad actual. Solo

así será posible comprender las contradicciones que la atraviesan y las perspectivas de su solución.

La Universidad, en su sentido más general, es una institución que forma parte de la superestructura de la sociedad. Sus funciones están determinadas, en última instancia, por la base material en la que se apoya y específicamente tienen que ver con la reproducción de los roles sociales altamente calificados y de la ideología que los consolida.

Es evidente que con el desarrollo del capitalismo, basado en una estricta y compleja división del trabajo, la Universidad alcanza un alto grado de tecnificación. Las exigencias del desarrollo científico y tecnológico demandan la modernización de la Universidad con miras a calificar los roles sociales cada vez más especializados que la sociedad capitalista necesita. Allí se forman los individuos que cumplen funciones de dirección intelectual relacionadas directa o indirectamente con la producción (ingenieros, químicos, médicos, etc.). De esta manera, en este sentido preciso la Universidad moderna garantiza la división capitalista del trabajo.

En el Perú, la adecuación de la Universidad al desarrollo del capitalismo fue lento, desigual y extremadamente contradictorio. Durante la primera mitad del siglo XX, la Universidad se fue modernizando, sobre todo más por la creciente presión de las capas medias que por la necesidad del capitalismo. La escasa fuerza de trabajo calificada que éste necesitaba (ingenieros, agrónomos, médicos, contadores, etc.) era satisfecha por la Universidad y Escuelas Superiores existentes o por profesionales venidos del extranjero. Desde la década del 50, con la expansión del polo urbano-industrial de la economía, se va a ampliar la demanda de profesionales y técnicos; pero también van a crecer las exigencias de las nuevas capas medias y populares por participar en la educación superior.

El proceso anterior, se traduce en un incremento de la matrícula en las instituciones de educación superior, principalmente en las universidades (Cuadro N° 1). Desde 1955, la tasa promedio de incremento anual de la matrícula ha sido de alrededor del 11.5 por ciento, con excepción del período 1980-1984 en donde llegó al 16.5 por ciento, debido a la aparición de nuevas universidades y de institutos de formación magisterial. La década de 1960 ha sido la de mayor expansión de la población universitaria. El número de universidades pasa de 7 en 1960 a 33 en 1970 y el número de alumnos se incrementó de 30,200 alumnos a 111,500, en el mismo período.

Cuadro N° 1

Evolución y Proyección de la población matriculada post secundaria en los períodos 1955-1964 y 1975-1980

Años	Educandos (miles)	Tasa promedio de incremento	Educandos ESEP (miles)
1955	20.2	—	—
1960	34.5	11.3	—
1964	63.5	16.5	—
1975 (x)	215.8	11.8	7.2
1980 (x)	364.3	11.1	721.2

(x) sin ESEP

Tomado de: Ministerio de Educación, *Modelo EDUPERU*, Lima, 1975, pág. 113.

A partir de 1970, la tasa de crecimiento de la matrícula en la educación superior va a disminuir en función de las restricciones impuestas al ingreso a las universidades y a la extinción de las escuelas de formación magisterial; sin embargo, esa tasa de crecimiento sigue estando muy por encima de la tasa de crecimiento promedio anual de la población de 19-24 años (alrededor del 4 por ciento).

Pero esta masificación de la educación superior no ha estado acompañada por una expansión de la demanda de profesionales y técnicos. Pues se trata de una Universidad en crecimiento en una sociedad basada en un débil capitalismo dependiente, particularmente restrictivo en cuanto a la absorción de fuerza de trabajo, puesto que éste sistema no requiere un desarrollo científico y tecnológico importante. Los equipos, los insumos, los métodos, las patentes y las marcas que utiliza son extranjeros. Los profesionales tienen que realizar tareas de naturaleza más administrativa, que de desarrollo científico y técnico. El sistema lleva entonces a la burocratización improductiva de los profesionales en el Estado. El Estado se convierte en el principal empleador de profesionales más por razones políticas y sociales que de orden económico. Todo ello se traduce no sólo en el subempleo o desempleo cuantitativo de la fuerza de trabajo calificada, sino en su subempleo cualitativo. El sistema no es capaz de utilizar plenamente la fuerza de trabajo calificada en su totalidad; pero cuando lo hace no permite su desarrollo científico y técnico. A los pocos que les ofrece un trabajo, se les presenta como profundamente insatisfactorio.

Si se examina los resultados del Censo de Población de 1972 en cuanto a la relación entre niveles de educación y niveles de ocupación, (Cuadro N° 2), se puede mostrar uno de los aspectos del problema señalado: el desempleo cuantitativo de la fuerza de trabajo de nivel universitario.

Cuadro N° 2

Estructura ocupacional de la población económicamente activa por niveles educativos (1972)
(Cifras relativas)

Niveles de educación	Ocupados	Desocupados
Sin instrucción	97.6	2.5
Básica I y II Ciclos	85.3	4.7
Básica III Ciclo y 4°, 5° y 6° de Secundaria	89.3	10.7
Superior	93.1	6.9

Tomado de: EDUPERU, Op. cit., pág. 178.

Así, se tiene que cuanto mayor es el nivel de instrucción mayor será la tasa de desempleo. Para la educación superior este alcanza al 6.9 por ciento de la fuerza de trabajo. Pero a esto se tiene que agregar el hecho de que por las condiciones propias de los países capitalistas dependientes, el desempleo abierto es mínimo comparado con el subempleo (por ejemplo, para el año 1972, el Ministerio de Trabajo calculaba que mientras el 4.4 por ciento de la población económicamente activa se encontraba desempleada, el 44.4 por ciento se hallaba en condición de subempleada). A pesar de no disponer de cifras del subempleo de la fuerza de

trabajo por niveles educativos, con bastante verosimilitud se puede pensar que entre los profesionales y técnicos el subempleo puede ser significativa.

Además, se debe tener en cuenta que el desempleo o subempleo de la fuerza de trabajo calificada se distribuye desigualmente de acuerdo al tipo de profesiones. Una investigación en profundidad de este problema revelaría que es en el área de humanidades y educación en donde existe la mayor proporción de fuerza de trabajo calificada que no está plenamente ocupada; mientras que esa proporción debe disminuir en medicina y en ingeniería y arquitectura. Ello en función de que el crecimiento de la oferta de profesionales en las primeras áreas ha sido mayor que las segundas, suponiendo un mercado de trabajo relativamente estable. Así, en las áreas de humanidades y educación estaba matriculado el 73 por ciento de los estudiantes universitarios en 1970, frente al 60 por ciento en 1960. En cambio, en las áreas de ciencias, medicina y arquitectura disminuyó en ese período del 40 por ciento al 27 por ciento. A ello habría que agregar que el número de graduados y titulados en el primer grupo de especialidades es mayor que en el del segundo, principalmente por la liberalización de las condiciones de estudio imperantes en éstas.

La situación que nos revela el Censo de 1972, ¿se agudizará en los próximos años, ¿habrá un mayor excedente de técnicos y profesionales? ¿Cuáles son las "soluciones" que nuestro sistema político y económico podrá ofrecer?

A pesar de la importancia del problema, no se han realizado investigaciones sobre él. Sin embargo, en la medida que el exceso de la oferta es lo que determina el subempleo o el desempleo de la fuerza de trabajo de calificación universitaria, se puede utilizar las proyecciones realizadas en el Modelo EDUPERU (ob. cit.) para 1980.

Para señalar las tendencias generales de la relación oferta demanda de fuerza de trabajo de calificación universitaria, se tiene que partir del examen del perfil educacional de la fuerza de trabajo y sus proyecciones para 1980 (Cuadro N° 3).

Cuadro N° 3

Perfil Educativo de la PEA (1972, 1980)
(cifras relativas)

Nivel de educación	1972	1980
Total	100.0	100.0
Sin instrucción	18.7	0.3
Primaria	55.3	62.8
Secundaria	20.2	24.4
Superior	0.0	12.5

1972. Censo Nacional de Población y Vivienda.
1980. Modelo EDUPERU.

Tomado de: Modelo EDUPERU. Op. cit., pág. 178.

Es evidente que es excesivamente optimista la proyección referente a la disminución de la población económicamente activa sin instrucción, puesto que el funcionamiento del Plan Alfabetización prácticamente ha fracasado en alcanzar las metas previstas. Sin embargo, las previsiones en cuanto a

la duplicación de la proporción de fuerza de trabajo con educación superior, son bastante verosímiles.

En primer lugar, por crecimiento de la matrícula en la educación superior (ver el cuadro N° 1), que aunque con una tasa promedio anual de incremento inferior a la del período 1964-1975, aumentará en más del 50 por ciento. Ello se explica por el incremento de los ingresantes a la Universidad, que aunque inferior al crecimiento del número de postulantes, se prevee alcanzará un aumento del 129 por ciento de 1975 a 1980 (de 45,400 ingresantes en 1975 se pasará a 104,000 en 1980).

En segundo lugar, por el mejoramiento de la tasa de éxito prevista (de 68.7 por ciento en 1975 se calcula que aumentará al 73.2 por ciento en 1980), no tanto por un aumento de la productividad del sistema sino por una liberalización de las condiciones de estudio. Ello se traducirá en el aumento del número de graduados y titulados de las universidades.

En tercer lugar, la oferta de profesionales se incrementará con los egresados de las Escuelas Superiores de Educación Profesional. Los bachilleres profesionales, que egresarán en 1980 en un número más modesto que el proyectado (173,000 bachilleres profesionales), presionarán sobre el mercado de trabajo calificado.

Del lado de la demanda de fuerza de trabajo de calificación universitaria, se puede considerar que no se modificarán los actuales niveles, puesto que no existen evidencias de un cambio en cuanto a las características de la estructura productiva del capitalismo que posibilite el incremento, su absorción. Más bien, con la profunda crisis económica que se inicia en el año 1975, el mercado de trabajo se ha ido contrayendo (inclusive a nivel de la burocracia estatal), y si se consideran las tendencias anteriormente señaladas, es probable que sea la fuerza de trabajo calificada una de las más afectadas proporcionalmente. Además, en la perspectiva de una recuperación económica coyuntural para los próximos años, no existen evidencias de que se garantice una mayor absorción de fuerza de trabajo calificada, pues esa recuperación se realizará sobre bases productivas mucho más restringidas.

De esta manera, las previsiones para 1980, muestran una oferta de profesionales y técnicos superior a las demandas del sistema capitalista dependiente. En donde una creciente expansión de la educación superior no va acompañada por una ampliación del sistema productivo, que posibilite una mayor absorción de profesionales y técnicos.

Sin embargo, la contradicción entre la oferta de profesionales y la capacidad del sistema para utilizarlos plenamente, que se ha tratado de mostrar en sus líneas más generales, constituye un aspecto exterior de un fenómeno más profundo y complejo: la crisis del sistema capitalista internacional, y particularmente, del capitalismo dependiente en el Perú.

La contradicción fundamental del sistema capitalista (contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción) se expresa de manera radical entre el grado de desarrollo que el capitalismo genera y las necesidades sociales (un trabajo no alienado, una jerarquía de consumo diferente, etc.).

Es precisamente la negación real de estas posibilidades de desarrollo colectivo lo que lleva a la necesidad de superación del capitalismo.

Esta contradicción del capitalismo se traduce en la subutilización de las capacidades científicas, y en general de la fuerza de trabajo calificada, en un doble sentido. De lado de la Universidad, se trata de un empobrecimiento progresivo de la ciencia y de la cultura capitalista. Esta ya no tiene el aspecto progresivo que originalmente desarrolló; más bien, se convierte en una limitación para el conocimiento objetivo de la naturaleza y de la sociedad, vaciándose de contenido real e histórico. De otro lado, en la sociedad, el capitalismo no logra utilizar plenamente a los científicos y profesionales, ni cualitativa, ni cuantitativamente, pues para seguir manteniendo su tasa de ganancia traba el progreso científico y técnico. Los centros de investigación no tienen el grado de libertad necesario porque deben adaptarse al mercado y este se adecúa a las necesidades de la tasa de ganancia de los monopolios.

En los países dependientes, las necesidades del capitalismo en cuanto desarrollo científico y técnico son mucho menores, pues están totalmente subordinados a las exigencias tecnológicas de los países metropolitanos. Esto hace que la contradicción entre desarrollo científico y técnico y las necesidades del sistema sean mucho más profundas. De allí que los profesionales universitarios se vean enfrentados a una sociedad que no les permite desarrollar todas las posibilidades del conocimiento científico de la naturaleza y de la sociedad. Y la Universidad tiende a reproducir esta situación, estos roles sociales que no pueden ser plenamente utilizados.

Es en este sentido que se puede hablar de una tendencia hacia la "proletarización" de los profesionales y técnicos, y en general de la fuerza de trabajo calificada. Tanto desde la perspectiva del contenido de sus estudios, que no corresponden a los problemas reales del país, y de los métodos de enseñanza, que se vuelven arbitrarios y repetitivos; como de la posibilidad de encontrar empleo, que permita un desarrollo profesional satisfactorio y no alienante.

Dos consecuencias podemos extraer del fenómeno que venimos examinando y que tienen importancia para señalar las perspectivas de transformación de la universidad. En primer lugar, una fuerte radicalización política de los estudiantes universitarios y de los científicos y profesionales calificados en general. Ya que esto no proviene sólo de una toma de conciencia "ideológica" de los problemas del país —que fue la base principal de politización del movimiento universitario en la fase anterior—, ni tampoco de la manipulación de los grupos políticos; sino que expresa igualmente los apremios materiales que afectan a los estudiantes universitarios y a la fuerza de trabajo calificada, a quienes el capitalismo limita en cuanto a sus posibilidades de desarrollo. Por ello, el contenido de sus luchas es necesariamente anticapitalista y ello los lleva a ligarse —realmente y no de manera ideológica— con la clase obrera y el movimiento popular oprimido por el capitalismo, y luchar por la construcción del socialismo.

En segundo lugar, la tendencia de los profesionales y técnicos que logran su incorporación al sis-

tema, por defender corporativamente sus privilegios y su estatus, frente a las crecientes masas de profesionales nuevos. Esas tendencias corporativas de defensa profesional se manifiestan en los colegios y asociaciones de profesionales, que establecen limitaciones al ejercicio profesional independiente y controlan las ingerencias externas al gremio. Sus demandas en general se orientan a la defensa de la calificación profesional y de las ventajas que han alcanzado por poseerlas en la sociedad actual.

En términos más amplios, se puede considerar ambos procesos como manifestación de la creciente diferenciación que se está produciendo en las capas medias. La creciente polarización de la actual fase de la lucha de clases en el país entre burguesía y proletariado lleva a amplios sectores medios unos hacia el campo de las clases populares, y otros hacia el lado de la clase dominante.

II. LA POLITICA UNIVERSITARIA DEL GOBIERNO MILITAR

Centro de las reformas que tienen como objetivo la homogenización y modernización del capitalismo dependiente en el país, el Gobierno Militar ha planteado un conjunto de medidas sobre la Universidad, cuya finalidad es la de adecuar la educación superior a las necesidades del nuevo modelo urbano-industrial de acumulación de capital. Con ello buscaba obtener profesionales y técnicos altamente calificados que permitan el funcionamiento y ampliación del capitalismo dependiente en el país.

Esta política universitaria se plasmó en las leyes 17437 y 18326 de 1969 y 1972, respectivamente. En ambos casos el objetivo perseguido era el mismo: modernizar y tecnificar la universidad aunque para alcanzarlo se plantean dos modelos diferentes de organización de la universidad.

En la ley de 1969, se propone un modelo de organización y de gobierno de las universidades, vertical, burocrático y autoritario, que en la práctica reduce la intervención de profesores y estudiantes en el control de la Universidad. Este modelo implicaba necesariamente la centralización del conjunto de las universidades del país en un sistema, en donde el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP) se convirtió en la máxima autoridad universitaria, subordinado a su vez al Ministerio de Educación. Asimismo, en cada Universidad se repite, en pequeño este modelo, en donde los rectores y consejos ejecutivos centralizan todo el poder, lo que ha dado lugar a la formación de pequeños grupos de profesores, que utilizando los mecanismos burocráticos de control, se han perpetuado en el gobierno de las universidades.

Además, la ley de 1969 modificaba sustancialmente la organización académica de la Universidad. En función de una mayor formación técnica y despolitizada y de una mayor centralización burocrática-administrativa, se organizan los Departamentos, como unidades académicas básicas de la Universidad. Con ello se atomiza la vida universitaria, permitiendo el control de los pequeños grupos que detentan el poder.

Igualmente, la ley de 1969, busca despolitizar al movimiento estudiantil. Para ello se desconoce los organismos representativos de los estudiantes y se plantea una representación restringida en los organismos de gobierno, en la mayor parte de ellos en proporción mínima y sin capacidad de intervenir en sus decisiones.

La aplicación de este proyecto chocó con la oposición mayoritaria de los miembros de la comunidad universitaria. El gobierno no encontró en la Universidad una base social de apoyo a su política autoritaria y burocrática. De allí que sólo mediante la represión policial y burocrática pudo imponer la nueva organización académica, administrativa y de gobierno.

Los ejemplos de mayor resistencia a la ley fueron los de la UNA, UNI y la U. de Huamanga. Los profesores, estudiantes y trabajadores no docentes intentaron frustrar la aplicación de la nueva ley; sin embargo, la oposición duró poco pues fue doblegada mediante una sistemática represión.

El nuevo modelo se ha implementado en todas las universidades. La adecuación a la nueva estructura demoró algunos años; pero, en líneas generales, constituye el piso sobre el cual se asienta la vida universitaria en la actualidad. Si bien es cierto que esta ley fue derogada en 1972, su reglamento sigue vigente desde esa fecha, constituyendo la base legal de funcionamiento de las universidades.

A pesar de los objetivos de la ley de 1969 —tecnificar la universidad y superar el caos académico y administrativo—, su aplicación durante siete años, ha demostrado que los problemas que intentaba solucionar se han agudizado. Primero, porque el nuevo régimen no ha logrado aumentar la eficiencia del sistema, pues la racionalización de los recursos que ello implicaba chocaba con una creciente burocracia, exigencia del modelo mismo. Segundo, porque la creciente politización del movimiento universitario no puede ser eliminada con medidas represivas, puesto que sus causas, como lo hemos señalado, son más profundas. Y tercero, porque las nuevas estructuras académicas, administrativas y de gobierno no han sido capaces de superar la grave crisis que en estos niveles venía arrastrando la Universidad, generando una situación de permanente inestabilidad.

Por el contrario, todas las contradicciones que existían antes de 1969, se han exacerbado. Básicamente, la Universidad está cada vez más separada de la sociedad, en el sentido de que es incapaz de asumir los problemas científicos y técnicos en función de las necesidades de las clases mayoritarias del país. No sólo se estudia repetitivamente y mal, sino que los problemas que se abordan en su gran mayoría no son los que interesan a las clases explotadas de la sociedad peruana. Además, en la otra cara de la medalla, la perspectiva de encontrar trabajo para los que salen de ella son cada vez más escasas, y en el caso de encontrarlo esas ocupaciones no les permiten desarrollarse plenamente como profesionales. Es decir, el fracaso de la ley de 1969 tiene que ver con la imposibilidad de adecuar la Universidad a las necesidades del sistema, por encima de éste, manteniendo sus contradicciones básicas. Sólo superando éstas es que es posible

reincorporar la Universidad a las necesidades vitales de las mayorías del país.

Frente al fracaso de la ley de 1969 de modificar la estructura universitaria y ante la casi unanimidad de la oposición del movimiento universitario, el gobierno procedió a modificar su política sobre la Universidad, no tanto en sus objetivos centrales, sino en la forma de llevarlos a la práctica. Así, en 1972, después de un largo debate, se promulga la Ley General de Educación, uno de cuyos capítulos corresponde a la educación superior. Frente al autoritarismo del modelo anterior, el nuevo modelo intenta la integración o participación del movimiento universitario en la vida de la Universidad. Con ello busca superar los errores del proyecto anterior, intentando aplicar su política a partir de la propia comunidad universitaria. En principio, la ley deja abierta la posibilidad de garantizar una serie de reformas que habían constituido los objetivos del movimiento universitario hasta los años 60 (gobierno, cátedra paralela, etc.) y que habían sido recortados o eliminados por la ley de 1969. Pero todo ello debía articularse —y de allí las limitaciones que establecía— en el proyecto mayor de servir al modelo de desarrollo del país, que el gobierno militar estaba implementando.

Por otro lado, la ley de 1972 limita el desarrollo de las universidades buscando convertirlas exclusivamente en centros de formación profesional. En primer lugar se crea un primer ciclo de educación superior anterior a la Universidad organizado en las Escuelas Superiores de Educación Profesional, dependientes directamente del Ministerio de Educación. En segundo lugar, se crea un tercer ciclo de educación superior, posterior a la Universidad, encargado principalmente de las tareas de investigación. De esta manera, se busca que las universidades pierdan su lugar central en la educación superior.

Convocada la Comisión Estatutaria Nacional, creada por la ley 19526, esta es elegida, en sus sectores más representativos, de manera democrática. Durante varios meses elabora el estatuto de la Universidad Peruana, que en línea general se ubica dentro de la ley, aunque en algunos aspectos específicos constituya un intento de sentar las bases de una Universidad científica y democrática.

Sin embargo, el Gobierno no promulga el Estatuto elaborado por la CEN. En ello tuvieron que ver, probablemente dos razones. Primero, la posibilidad de que resurgiera el movimiento estudiantil que desde los años 70 había perdido su fuerza anterior. Un gobierno democrático de la universidad habría podido desarrollar un movimiento universitario que después el gobierno se hubiera visto en dificultades para manejar. Segundo, la escasa importancia real concedida a la universidad, a no ser como problema de "orden interno".

Así, desde 1973 hasta la actualidad, el Gobierno Militar se ha despreocupado de la universidad, siempre y cuando no alterara el "orden público" en donde intervenía para reprimir. Evidentemente, detrás de este aparente desinterés se esconde el propósito de empantanar cada vez más la situación universitaria. Con ello conseguía lo que no había podido lograr con su política anterior: desorientar y desorganizar al movimiento universitario, haciéndolo incapaz de una respuesta orgánica y sistemática a la política

del gobierno. En este sentido son instructivos los ejemplos de la UNI y de La Cantuta. En ambos casos, una violenta represión al movimiento estudiantil no ha encontrado una respuesta lo suficientemente coherente y eficaz.

En la actualidad, podemos notar que el gobierno con el apoyo de los grupos tecnocráticos, que han venido controlando la Universidad, y los importantes sectores apristas que se han consolidado en estos últimos años, ha comenzado a implementar una política tendiente a consolidar la situación universitaria, mediante un control autoritario y represivo. En conclusión, la política del gobierno militar tendiente a cambiar la Universidad y adecuarla a las necesidades del capitalismo dependiente es inoperante y ello globalmente tanto del lado de los cambios en la universidad como del sistema, en su conjunto. Fundamentalmente, porque ha intentado modernizar la Universidad sin tocar las causas estructurales de la crisis. Por el contrario, ha acentuado las contradicciones del sistema universitario y la sociedad peruana. Pues aquél se ha expandido y ampliado, mientras que esto es incapaz de utilizar plenamente la mano de obra calificada. De allí que la única alternativa real del gobierno sea la de mantener a la Universidad dentro de los límites del "orden público", sin preocuparse en resolver los problemas de fondo, puesto que ello significaría la transformación radical del sistema.

Y con este programa está totalmente de acuerdo la burguesía. Ellos o sus representantes no han ofrecido ninguna propuesta alternativa, puesto que chocaría con las limitaciones propias del capitalismo dependiente. Para sus requerimientos de fuerza de trabajo calificada le basta el funcionamiento eficiente de unas pocas universidades particulares y escuelas superiores, además del apoyo económico que el gobierno puede ofrecerles. Por eso, la alternativa autoritaria y burocrática que el gobierno está desarrollando en las universidades coincide plenamente con los intereses de la burguesía.

III. HACIA UNA NUEVA UNIVERSIDAD

Frente a la política del gobierno en la Universidad, el movimiento universitario no ha sido capaz de plantear una alternativa sistematizada y orgánica. Desde 1972, cuando se intentó plantear una perspectiva de transformación de la Universidad que se plasmó en el Estatuto Universitario aprobado por la CEN, no ha existido un esfuerzo sistemático de desarrollar un modelo que permita orientarla en función de un cambio radical en la sociedad peruana.

En efecto, el movimiento universitario ha estado atrapado en una falsa disyuntiva: por un lado, en luchar por mejorar las condiciones de estudio y de investigación en la Universidad; y, por otro, en luchar junto a la clase obrera y al movimiento popular por la transformación de la sociedad. Para ello se ha buscado apoyar las luchas de los trabajadores participando en sus movilizaciones o propagandizando sus reivindicaciones, pero como algo separado de las reivindicaciones universitarias.

Lo propio de la lucha del movimiento universitario ha sido la defensa de las condiciones de estudio específicas de la Universidad (modernización del

contenido y los métodos de enseñanza, la eliminación de las restricciones al ingreso a la Universidad) y las condiciones materiales de los estudiantes (comedor, transporte, aulas, etc.).

Junto a ello, se ha planteado la exigencia de unir el movimiento universitario a la lucha de la clase obrera y del movimiento popular. Pero esta vinculación se ha planteado en el terreno estrictamente ideológico, es decir, basada en el convencimiento de la necesidad del triunfo de la clase obrera y del socialismo. No llegando a precisar la base material de los intereses históricos comunes.

Sin embargo, una perspectiva del movimiento universitario que resalte únicamente el aspecto de la mejor formación y calificación profesional, está destinado necesariamente a separarse, de hecho del movimiento obrero y popular. Pues, en la sociedad actual, donde el estudiante está separado del trabajador y en el cual un mayor nivel de instrucción sirve para alcanzar salarios privilegiados y donde la selección externa a la universidad sólo permite a una minoría ingresar a ella, la mejor formación profesional —en sí misma— sirve sólo para incentivar a una minoría privilegiada. Convirtiéndose de esta manera el acercamiento al movimiento popular en una mistificación ideológica.

Por eso, las luchas por las condiciones de estudio en la Universidad o el apoyo a las reivindicaciones de las clases explotadas, no bastan. Basándose en las condiciones materiales de la Universidad y de su papel en el conjunto de la sociedad, esas luchas tienen que ser integradas en una perspectiva más avanzada. Se trata de construir un movimiento universitario que se apoye en la superación de la contradicción que expresa el sistema capitalista: la lucha por transformar una Universidad que garantiza la reproducción de los roles sociales de una sociedad capitalista dependiente y de la división social en la que ella se basa.

Esta perspectiva no es utópica ni irreal. Pues no se trata como pensarían algunos de contruir una Universidad socialista dentro de la sociedad capitalista. Lo que se busca es crear un modelo alternativo de Universidad, que permita situar las luchas universitarias en la perspectiva de la lucha contra el capitalismo y de la construcción del socialismo. Es decir, poner en discusión la Universidad, criticar de raíz los roles sociales que ella produce y convertir esa crítica en instrumento de combate contra el sistema. Así, el movimiento universitario, define su rol preciso en la lucha por la eliminación del capitalismo, al desarrollar la crítica —real y no ideológica— contra la división capitalista del trabajo y los roles sociales que ella implica. En función de lo planteado, podemos precisar tres problemas fundamentales para la construcción de una perspectiva alternativa que, en la lucha contra el capitalismo, nos lleve a una nueva Universidad.

1.—En primer lugar, la definición de los objetivos concretos de la crítica de los roles sociales de la división capitalista del trabajo. Ello se traduce en el examen y crítica de cada disciplina (medicina, economía, educación, etc.) para desmistificar su rol social y la estructura en la cual se inserta (la salud, la estructura económica, la escuela, etc.). Con ello superamos la crítica ideológica a la subordinación

de la ciencia al sistema capitalista, partiendo de la realidad, base objetiva del examen de la relación roles sociales (profesiones) y los intereses de las clases sociales. Además, ese examen debe comprender la investigación del mercado de trabajo que se le ofrece al profesional y las limitaciones que se le impone en cuanto a su desarrollo científico, con lo cual se señalaría las barreras estructurales a su incorporación no alienada en la división capitalista del trabajo. De esta manera se lucharía por superar el aislamiento de la Universidad e incorporarla a los diversos sectores de la sociedad. A partir de lo cual es posible definir las líneas de transformación de las profesiones y orientarlas en función de la clase obrera, es decir, del socialismo.

2.—En segundo lugar, el movimiento universitario orientado hacia el socialismo, no puede estar aislado del movimiento obrero y popular, pero tampoco puede ser considerado como un reservorio de "cuadros" revolucionarios. Ello implica definir al movimiento universitario como un movimiento político y de masas. Político en cuanto desarrolla una crítica del sistema y busca insertarse en la lucha contra él al lado de otras fuerzas sociales. De masas, en cuanto desarrolla esa crítica inductivamente, partiendo de una situación específica y concreta. Ello significa luchar por la vigencia de las libertades democráticas en la universidad, que

posibilite la libertad de cátedra y de expresión y que permita el estudio de la realidad peruana sin recortes ideológicos o políticos. Sólo la autonomía de la universidad y un gobierno democrático, con representación de profesores, estudiantes y trabajadores no docentes, puede garantizar el desarrollo del movimiento universitario. Para ello es necesario, también, un debate amplio y democrático —que excluya todo tipo de sectarismo y dogmatismo— de profesores, estudiantes y trabajadores no docentes, que examine críticamente la situación anterior, y plantee un programa orientado a la transformación de la Universidad y en el que confluyan sus exigencias e intereses fundamentales.

3.—Para desarrollarse como movimiento anticapitalista de masas, el movimiento universitario necesita de una vanguardia política. Sólo así podrá superar la lucha exclusivamente reivindicativa e insertarse en una crítica general de la sociedad. Un movimiento universitario espontáneo, sería incapaz de superar las limitaciones propias de las condiciones en las que se desarrolla. Además, el éxito del movimiento universitario depende del éxito de la lucha en otros sectores de la sociedad, lo que únicamente puede ser coordinado por una vanguardia política. Sin esa vinculación la lucha del movimiento universitario termina siendo abstracta y, al final, estéril.

EMPRESA EDITORA SOCIEDAD Y POLITICA S.C.R.L.
CAPITAL S/. 20,000.00

SOCIOS:

Aníbal Quijano S/. 10,000.00

Heracleo Benilla 5,000.00

Julio Cotler 5,000.00

Horacio Urteaga 306 (Jesús María)

LIMA - PERU

